



Asamblea General

Distr. general
28 de julio de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Comunicaciones transmitidas, casos examinados, observaciones y otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*

121^{er} período de sesiones (11 a 15 de mayo de 2020)**

I. Comunicaciones

1. Entre el 15 de febrero y el 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió 18 casos a: Bangladesh (1), China (5), Egipto (6), Pakistán (3), Venezuela (República Bolivariana de) (2) y Viet Nam (1).
2. En el período de sesiones, celebrado del 11 al 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo decidió transmitir 168 nuevos casos denunciados de desaparición forzada a 14 Estados: Bangladesh (8), Burundi (35), China (6), Egipto (9), Federación de Rusia (11), Filipinas (2), India (6), Iraq (3), Libia (3), Malasia (1), Nigeria (2), Pakistán (15), República Árabe Siria (36) y Sri Lanka (31).
3. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir 7 nuevos casos denunciados de vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada supuestamente perpetrados por agentes no estatales en Libia (1) y Ucrania (6).
4. El Grupo de Trabajo también dio por esclarecidos 47 casos en: Bangladesh (1), China (13), Colombia (6), Egipto (3), Pakistán (9), Filipinas (12), Turkmenistán (1), Venezuela (República Bolivariana de) (1) y Viet Nam (1). De ellos, 19 casos se dieron por esclarecidos a la vista de la información facilitada por los Gobiernos, 27 a la vista de la información facilitada por las fuentes y 1 a la vista de la información facilitada tanto por el Gobierno como por la fuente.
5. Entre el 15 de febrero y el 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió 31 comunicaciones, de forma individual o junto con otros mecanismos de procedimientos especiales. Las comunicaciones consistieron en 8 llamamientos urgentes conjuntos dirigidos a Albania (1), Bangladesh (1), China (2), Egipto (1), el Irán (República Islámica

* Los anexos del presente documento se distribuyen tal como se recibieron, únicamente en los idiomas en que se presentaron.

** En vista de las restricciones a los viajes impuestas por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo decidió reunirse a distancia por videoconferencia, del 11 al 15 de mayo de 2020, para cumplir parcialmente el programa de actividades de su 121^{er} período de sesiones. En esas reuniones, el Grupo de Trabajo siguió examinando la información recibida sobre presuntos casos de desaparición forzada, así como la información facilitada por los Estados y por las fuentes de los casos.



del) (2) y Viet Nam (1); 18 cartas de denuncia conjuntas dirigidas a la Arabia Saudita (1), Bahrein (1), Bosnia y Herzegovina (1), Chile (1), China (1), el Irán (República Islámica del) (1), el Iraq (1), Jordania (1), México (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Tailandia (1), Turquía (3) y los Estados Unidos de América (1), y a “otros actores” (el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Grupo del Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (2); 4 cartas de intervención inmediata a Argelia (1), Belarús (1), México (1) y Filipinas (1); y “otra carta” a Egipto (1)¹.

6. El 3 de marzo de 2020, el Presidente-Relator participó en un acto organizado por el Gobierno de la Argentina y celebrado en Buenos Aires para conmemorar el 40º aniversario del establecimiento del Grupo de Trabajo, que se constituyó el 29 de febrero de 1980. El evento, que tuvo lugar en el antiguo centro de detención clandestino conocido como la ESMA, fue inaugurado por el Secretario de Derechos Humanos de la Argentina y contó con la participación de Estela de Carlotto y Rosa Bru, en representación de las familias de los desaparecidos. El Presidente-Relator hizo un repaso de la historia del Grupo de Trabajo y reflexionó sobre las razones por las que el mandato es tan necesario hoy como lo fue en 1980. También presentó material audiovisual nuevo².

7. El 6 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, emitió un comunicado de prensa previo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se pedía a los hombres de todo el mundo que se integraran en los movimientos en favor de la igualdad de género y se convirtieran en defensores de los derechos de la mujer³.

8. El 16 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que se instaba a los Estados a que evitaran excederse en las medidas de seguridad en respuesta a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como se les recordaba que las facultades extraordinarias no debían utilizarse para anular a la disidencia⁴.

9. El 23 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su profunda preocupación por el bienestar de tres defensores de los derechos humanos que habían sido víctimas de desaparición forzada a manos de las autoridades chinas poco después de ser detenidos en diciembre de 2019⁵.

10. El 26 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que se subrayaba que la crisis de la COVID-19 no podía resolverse únicamente con medidas de salud pública y medidas de excepción, y que debían abordarse también los demás derechos humanos⁶.

11. El 27 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, se sumó al llamamiento de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad a ejercer la solidaridad y proteger mejor a las personas de edad, que son las más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19⁷.

12. El 9 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, hizo suyo un comunicado de prensa emitido por la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, en el que se destacaba que la más estricta legislación que incorpora la radical ley de lucha contra el terrorismo en Egipto viene a

¹ Esas comunicaciones se hacen públicas 60 días después de su transmisión al Estado, junto con las respuestas recibidas de los Gobiernos, si las hubiere, y pueden consultarse en: <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

² <https://vimeo.com/showcase/6609050>.

³ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25672&LangID=E.

⁴ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E.

⁵ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25735&LangID=E.

⁶ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E.

⁷ <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=S>.

erosionar aún más los derechos humanos fundamentales y podría resultar en más detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de tortura, además de una mayor represión de la libertad de expresión, pensamiento, asociación y reunión pacífica⁸.

13. El 17 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su grave preocupación por la multiplicación de casos de asesinatos provocados por la policía y otros actos de violencia dentro del contexto de las medidas de emergencia por la COVID-19⁹.

14. El 28 de abril, el Grupo de Trabajo recibió una respuesta positiva del Gobierno del Uruguay a su solicitud de realizar una visita al país. La visita tendrá lugar a finales de 2020 o en 2021, según evolucione la pandemia de COVID-19.

15. El 14 de mayo de 2020, con carácter previo a la celebración, el 17 de mayo de 2020, del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Grupo de Trabajo se sumó a una declaración emitida por el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, en la que se exhortaba a los Estados del mundo a velar por que las medidas de emergencia adoptadas con motivo de la COVID-19 no empeoraran las desigualdades ni los obstáculos estructurales a las que se enfrentaban las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ni dieran lugar a un aumento de la violencia y la discriminación contra ellas¹⁰.

16. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó tres denuncias generales relativas a la Arabia Saudita, Argelia y el Iraq.

II. Otras actividades

17. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo mantuvo reuniones virtuales con representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupaban de la cuestión.

18. También durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo mantuvo una reunión virtual con representantes del Gobierno del Japón.

III. Información relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

Albania

Llamamiento urgente conjunto

19. El 20 de marzo, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la supuesta expulsión inminente de un ciudadano turco, que probablemente sería detenido y enjuiciado en Turquía, y posiblemente sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por su supuesta o presunta pertenencia al movimiento Hizmet o de Gülen.

Observación

20. El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por las violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de desaparición forzada, que supuestamente sufrió un ciudadano turco antes de ser expulsado de Albania a Turquía, en presunta contravención de la legislación nacional pertinente y del principio de no devolución. Al abordar la cuestión de los secuestros extraterritoriales (A/HRC/42/40, párr. 56; A/HRC/WGEID/119/1, párrs. 112 y 113), el Grupo de Trabajo ha subrayado que no

⁸ <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25787&LangID=S>.

⁹ <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=S>.

¹⁰ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=E.

reconocer la privación de libertad a manos de agentes del Estado y negarse a reconocer la detención equivale a la perpetración de actos de desaparición forzada, aunque sean de corta duración.

21. A este respecto, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno de Albania a que detenga e impida la expulsión de los ciudadanos turcos residentes en Albania, investigue las denuncias de violaciones de los derechos humanos relacionadas con esas prácticas y, de confirmarse los hechos, proporcione reparación a las presuntas víctimas y sus familiares. El Grupo de Trabajo también pide a las autoridades albanesas que realicen evaluaciones individuales exhaustivas de los posibles riesgos a que se verían expuestos los derechos de esas personas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Argelia

Llamamiento urgente conjunto

22. El 30 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la detención y el encarcelamiento presuntamente violentos de Slimane Hamitouche, un defensor de los derechos humanos argelino que ayudaba a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. El Gobierno de Argelia respondió el 20 de abril de 2020.

Denuncias generales

23. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre presuntas dificultades en la aplicación en Argelia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La denuncia general (véase el anexo I) se centra en las desapariciones forzadas de saharauis presuntamente perpetradas en los campamentos de Tinduf por el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (POLISARIO), así como en el hecho de que las autoridades de Argelia no hayan facilitado el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares.

Bahrein

Carta de denuncia conjunta

24. El 2 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una denuncia general relativa a los actos de tortura y otras formas de maltrato, incluida la desaparición forzada, de que fueron víctimas Ali Ebrahim Mohamed Ameen Ebrahim AlArab, Husain Ali Redha Ebrahim Khamis Barbar, Isa Jaafar Isa Hasan AlAbd, Majeed Ahmed Habib Ahmed, Ali AbdulAziz Ali Husain Mohamed, Salah Saeed Saleh Ali Hasan AlHammar, Ali Hasan Ali Ashoor Ali, y Sadiq Jaafar Isa Abdulla Hasan AlAbd.

Bangladesh

Acción urgente

25. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno el caso relativo a Shafiqul Islam, también conocido como Shafiqul Islam Kajol, quien presuntamente desapareció en Daca el 10 de marzo de 2020, un día después de que un político presentara cargos contra él por infracción de la Ley de Seguridad Digital.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

26. El 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Shafiqul Islam Kajol a la vista de la información facilitada por las fuentes. Según se informó, el Sr. Kajol reapareció y posteriormente fue detenido.

Procedimiento ordinario

27. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno ocho casos, relativos a:

- a) Tara Mia, presuntamente secuestrado el 14 de agosto de 2012 en Pallabi (Daca) por hombres que afirmaron ser agentes de un organismo encargado de hacer cumplir la ley;
- b) Monir Hossain, del que se supo por última vez el 21 de septiembre de 2010 en Gulistán (Daca) y se cree que fue secuestrado por el Batallón de Acción Rápida;
- c) Mohammad Nur Hosan, presuntamente secuestrado el 20 de junio de 2011 en Chouddagram Upazila (distrito de Cumilla) por hombres que, al parecer, eran miembros de un organismo encargado de hacer cumplir la ley;
- d) Mohon Mia, presuntamente secuestrado el 10 de junio de 2018 en Mirpur (Daca) por individuos que afirmaron ser miembros de la Sección de Investigación de la Policía;
- e) Zakir Hossain, presuntamente secuestrado el 7 de abril de 2015 en Gulshan (Daca) por individuos armados que, según se cree, eran agentes de la autoridad;
- f) Iftekhar Ahmed Dinar, del que supuestamente se supo por última vez el 2 de abril de 2012 en la zona de Gulshan (Daca) y fue al parecer secuestrado por las fuerzas del orden;
- g) Juned Ahmed, del que supuestamente se supo por última vez el 2 de abril de 2012 en la zona de Gulshan (Daca) y fue al parecer secuestrado por las fuerzas del orden;
- h) M. Ilias Ali, presuntamente secuestrado el 18 de abril de 2012 en Daca por hombres armados que, según se cree, eran agentes del Estado.

Llamamiento urgente conjunto

28. El 3 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la supuesta desaparición forzada del periodista Shafiqul Islam Kajol, la excesiva demora de las autoridades en comenzar a investigar la desaparición y el inicio de investigaciones contra el Sr. Kajol por infracciones a la Ley de Seguridad Digital.

Observación

29. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que lleva varios años ocupándose de informes similares relativos a la situación de la desaparición forzada en Bangladesh. Le alarma seguir recibiendo casos, muchos de ellos sobre personas vinculadas a partidos políticos de la oposición, así como la aparente impunidad que rodea a esa práctica en el país. También deplora la falta de colaboración con el Grupo de Trabajo. A este respecto, el Grupo de Trabajo señala que este año no ha recibido respuesta a ninguno de los casos pendientes y que, desde que transmitió el primer caso al Gobierno en 1996, solo ha dado por esclarecido un caso. El Grupo de Trabajo espera recibir lo antes posible información sobre los casos pendientes.

30. El Grupo de Trabajo también reitera su interés en visitar Bangladesh, expresado en varias comunicaciones transmitidas desde 2013.

Belarús

Información facilitada por el Gobierno

31. El 23 de marzo de 2020, el Gobierno de Belarús transmitió información sobre cuatro casos pendientes, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de intervención inmediata

32. El 19 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata relativa a los actos de intimidación y acoso presuntamente cometidos contra un abogado que se ocupaba de los casos de desaparición forzada en el país.

33. El 23 de abril de 2020, el Gobierno de Belarús respondió a la carta de denuncia conjunta.

Observación

34. El Grupo de Trabajo recuerda que la conclusión o suspensión de una investigación penal relativa a una presunta desaparición forzada no exime al Estado de su obligación de buscar y localizar a la persona desaparecida o sus restos, lo que incluye la identificación de los restos y su restitución a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales. A este respecto, el Grupo de Trabajo insta de nuevo al Gobierno de Belarús a que determine la suerte y el paradero de los desaparecidos de forma plenamente coordinada con los familiares de esas personas.

35. El Grupo de Trabajo está particularmente preocupado por las denuncias de represalias contra abogados y defensores de los derechos humanos que representaban a los familiares de los desaparecidos. A este respecto, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Belarús que vele por que todos los que participen en la investigación de casos de desaparición forzada, incluidos el denunciante, el abogado y los testigos, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia, como se dispone en el artículo 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Bosnia y Herzegovina**Información facilitada por las fuentes**

36. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

37. El 17 de febrero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta imposición de la prescripción, denominada *zastara*, a las víctimas de la guerra que demandaban reparación por vía judicial, así como a la imposición de tasas judiciales a las víctimas cuyas reclamaciones habían prescrito debido a esa imposición.

Brasil**Respuesta a denuncia general**

38. El 29 de enero de 2020, el Gobierno del Brasil transmitió una respuesta a una denuncia general remitida el 31 de octubre de 2019 (A/HRC/WGEID/119/1, párr. 23, y anexo I) sobre los supuestos retrocesos en las políticas públicas estatales dedicadas a investigar las desapariciones forzadas ocurridas en el Brasil durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985, en particular por lo que se refiere a la búsqueda de las víctimas. La respuesta completa del Gobierno figura en el anexo III del presente informe.

Burundi**Procedimiento ordinario**

39. El Grupo de Trabajo transmitió 35 casos al Gobierno (véase el anexo II).

Observación

40. El Grupo de Trabajo observa que los casos examinados durante el presente período de sesiones revelan tendencias similares a las que se señalaron en el informe relativo a su 120º período de sesiones (A/HRC/WGEID/120/1, párrs. 29 a 33).

Chile

Carta de denuncia conjunta

41. El 30 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la reactivación del proyecto de ley que regulaba la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, más conocido como “Ley Humanitaria” (*Boletín* núm. 12.345-073), en la que expresaba su preocupación por que permitiría el otorgamiento de beneficios a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Grupo de Trabajo recuerda que, según el artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Además, en el ejercicio del derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de los actos de desaparición forzada.

China

Medidas de acción urgente e información facilitada por el Gobierno

42. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno cinco casos, relativos a:

- a) Ding Jiayi, presuntamente puesto bajo arresto domiciliario en un lugar designado, de emplazamiento desconocido, tras ser privado de libertad el 26 de diciembre de 2019;
- b) Zhang Zhongshun, presuntamente puesto bajo arresto domiciliario en un lugar designado, de emplazamiento desconocido, tras ser privado de libertad el 26 de diciembre de 2019;
- c) Dai Zhenya, presuntamente puesto bajo arresto domiciliario en un lugar designado, de emplazamiento desconocido, tras ser privado de libertad el 26 de diciembre de 2019;
- d) Xu Zhiyong, presuntamente puesto bajo arresto domiciliario en un lugar designado, de emplazamiento desconocido, tras ser privado de libertad en febrero de 2020;
- e) Qiaochu Li, presuntamente detenido el 16 de febrero de 2020 en una vivienda en Beijing.

43. El 2 de abril de 2020, el Gobierno transmitió información relativa a esos casos, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Procedimiento ordinario

44. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno seis casos, relativos a:

- a) Gulixian Abasi, quien presuntamente fue secuestrada en Urumqi, en septiembre de 2018, por agentes de policía;
- b) Patiguli Awuti, quien presuntamente desapareció a principios de julio de 2018 en Urumqi (Xinjiang), y al parecer se encuentra privado de libertad;
- c) Zeminisa Maimaitaisa, quien presuntamente desapareció en 2018 en el condado de Moyu, ciudad de Jotán (Xinjiang), y al parecer se encuentra privada de libertad;

d) Ruzewake Yilihamu, quien presuntamente desapareció a finales de 2017 o principios de 2018 en el condado de Moyu, ciudad de Jotán (Xinjiang), y al parecer se encuentra privado de libertad;

e) Maimaitiming Reman, quien presuntamente desapareció en 2017 o 2018 y al parecer se encuentra privado de libertad;

f) Qurban Mamut, quien presuntamente fue secuestrado en su domicilio en Urumqi (Xinjiang) en algún momento entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 y al parecer se encuentra privado de libertad.

Esclarecimiento

45. A la vista de la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 12 casos, a los que había aplicado la norma de los seis meses en su 119º período de sesiones (A/HRC/WGEID/119/1, párr. 33), relativos a Gulikamaier Alifu, Talati Gulinaer, Buayshem Kadir, Osman Tohti, Musa Kadir, Eminjan Kadir, Mardan Kadir, Memetjan Ayup, Roxangul Tahir y tres niños. Según se informó, esas personas estaban en libertad.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

46. A la vista de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Quanzhang Wang, quien reapareció en prisión y ha sido puesto en libertad.

Información facilitada por las fuentes

47. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por un Gobierno

48. El Gobierno de Suecia proporcionó información sobre un caso, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Llamamientos urgentes conjuntos y respuestas

49. El 9 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la presunta detención arbitraria y desaparición forzada de tres defensores de los derechos humanos. Ding Jiaxi, Zhang Zhongshun y Dai Zhenya fueron detenidos en diferentes lugares el 26 de diciembre y puestos bajo arresto domiciliario en un lugar designado.

50. El 2 de abril de 2020, el Gobierno de China transmitió una respuesta al llamamiento urgente. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya facilitado información sobre los lugares concretos en que se encuentran reclusos Ding Jiaxi, Zhang Zhongshun y Dai Zhenya.

51. El 12 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con las denuncias de detención arbitraria y el riesgo de sufrir malos tratos o tortura de Shao Zhongguo como represalia por sus actividades como defensor de los derechos humanos y su asociación con Gao Zhisheng, otro defensor de los derechos humanos cuya suerte y paradero se desconocen actualmente.

52. El 2 de abril de 2020, el Gobierno de China transmitió una respuesta al llamamiento urgente. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya facilitado información sobre investigación alguna llevada a cabo en relación con la desaparición de Gao Zhisheng.

Carta de denuncia conjunta

53. El 7 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las presuntas sanciones impuestas durante el brote de COVID-19, en particular la detención arbitraria de Guo Quan

y la desaparición forzada de Xu Zhiyong como resultado del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión.

Observación

54. Al Grupo de Trabajo le preocupa seguir recibiendo casos de presuntas desapariciones en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur relativas a personas que, al parecer, llevan varios años en paradero desconocido. También le alarman las denuncias de que algunas de esas personas fueron perseguidas por tener parientes en el extranjero. Asimismo, el Grupo de Trabajo reitera su preocupación por la persistente imposición de penas de arresto domiciliario en un lugar designado y por la aplicación del sistema de reclusión “*liuzhi*”, así como por la negativa a facilitar información a los familiares y representantes legales sobre el paradero de las personas recluidas.

55. El Grupo de Trabajo subraya que la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce el derecho de toda persona a ser mantenida en un lugar de detención oficialmente reconocido y a ser presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión (art. 10, párr. 1). La Declaración establece la obligación de las autoridades encargadas de la detención de proporcionar información exacta sobre la detención de las personas y el lugar donde se cumple a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga un interés legítimo (art. 10, párr. 2). Asimismo, la Declaración establece la obligación de mantener un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad en todo lugar de detención (art. 10, párr. 3) y dispone que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas (art. 7).

56. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 19 de febrero de 2013, y a sus recordatorios posteriores.

Colombia

Esclarecimiento

57. A la vista de la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos seis casos, a los que había aplicado la norma de los seis meses en su 119º período de sesiones (A/HRC/WGEID/119/1, párr. 42), relativos a Jesús Antonio Urrea Sanmiguel, Fredy Manuel Causil Noriega, Gildardo Salinas Piedrahita, José Aldemar Panesso Cartagena, Yuri Andrea Trujillo Muñoz y Eder Orlando Panqueba. Según se informó, esas personas fallecieron y sus restos fueron identificados.

República Popular Democrática de Corea

Información facilitada por el Gobierno

58. El 17 de marzo de 2020, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea transmitió información sobre 44 casos, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Respuesta a carta de denuncia conjunta

59. El 24 de febrero de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a una carta de denuncia conjunta remitida el 11 de febrero de 2020 y relativa a 11 personas, entre ellas Jeong Gyeong-Suk, Lee Dong-Ki, Jang Ki-Yeong y Choi Jeong-Woong, que presuntamente seguían desaparecidas desde el secuestro del vuelo YS-11 de Korean Air Lines en 1969.

Observación

60. El Grupo de Trabajo reitera su gran preocupación por la falta de cooperación del Gobierno, en particular por las respuestas idénticas que sigue recibiendo en relación con los casos transmitidos. El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que se lleven a cabo investigaciones que esclarezcan la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, así como de que se le facilite información precisa sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos de las investigaciones.

Egipto

Acción urgente

61. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno seis casos, relativos a:

- a) Abd Al-Hakim Al-Gamal, ciudadano egipcio nacido el 29 de julio de 1996, presuntamente secuestrado cerca de la Facultad de Ingeniería, situada en la calle Abou Qeer, el 6 de enero de 2020 a las 16.00 horas aproximadamente por agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;
- b) Abdulrahman Mohammed Yassin Ali, ciudadano egipcio nacido el 6 de noviembre de 1985, presuntamente desaparecido el 18 de febrero de 2020 mientras se hallaba privado de libertad en la comisaría “3 de octubre”;
- c) Naji Mohammad Naji Mohammad Salim, ciudadano egipcio nacido el 5 de febrero de 1975, presuntamente secuestrado el 31 de marzo de 2020 por agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;
- d) Badr-Eddine Abu Hita, ciudadano egipcio nacido en 1975, presuntamente secuestrado en su domicilio el 12 de marzo de 2020 a las 2.00 horas;
- e) Mohamaden Gouda, ciudadano egipcio nacido el 17 de marzo de 1956, presuntamente secuestrado en su domicilio el 27 de febrero de 2020 por varios miembros de la policía, el ejército y la Seguridad Nacional, en uniforme o vestidos de civil;
- f) Abdel Halim El Sayed El Sayed, ciudadano egipcio nacido el 1 de enero de 1984, supuestamente secuestrado en su domicilio el 3 de febrero de 2020 por efectivos de la seguridad del Estado.

Procedimiento ordinario

62. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno nueve casos, relativos a:

- a) Mahmoud Hussein, ciudadano egipcio nacido el 20 de mayo de 1996, presuntamente detenido el 11 de agosto de 2018 en su domicilio por agentes de policía, unos uniformados y otros vestidos de civil;
- b) Hadi Refaat Abdulwahed Mostafa, ciudadano egipcio nacido el 27 de abril de 1997, presuntamente detenido el 27 de enero de 2019 por agentes de la policía local y agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;
- c) Omar Hatem Gamal Mohamed Mostafa, ciudadano egipcio nacido el 24 de marzo de 1994, presuntamente detenido el 20 de diciembre de 2018 por agentes de policía uniformados o vestidos de civil cuando salía de la cafetería Zahrat al-Bustan, donde trabajaba;
- d) Mohammed Atiya, ciudadano egipcio nacido el 1 de enero de 1997, presuntamente secuestrado el 17 de febrero de 2018 a las 21.00 horas en la estación ferroviaria Ramsés (El Cairo) por varios agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;
- e) Abo-Bakr El-Senhody, ciudadano egipcio nacido el 12 de abril de 1999, presuntamente detenido el 14 de diciembre de 2017 cuando viajaba en automóvil hacia Shalatín pasando por Asuán (sur de Egipto);

f) Samir Abou Halawa, ciudadano egipcio nacido el 1 de octubre de 1986, presuntamente detenido el 27 de junio de 2018 cerca de su lugar de residencia por agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;

g) Abdallah al-Hadidi, ciudadano egipcio nacido el 28 de junio de 1997, presuntamente detenido el 6 de marzo de 2018 por efectivos de la Seguridad Nacional que practicaban una redada en la ferretería en que trabajaba;

h) Ashraf Zahran, ciudadano egipcio nacido el 3 de diciembre de 1962, presuntamente secuestrado el 23 de enero de 2020 en su domicilio por agentes de policía uniformados y agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil;

i) Mohamed Ahmed Hassan Ahmed, ciudadano egipcio nacido el 17 de febrero de 1986, presuntamente secuestrado cerca de su lugar de trabajo el 19 de mayo de 2019 por agentes de la Seguridad Nacional.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

63. A la vista de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos tres casos, relativos a Islam El-Sayed Mahfouz Salem Khalil, quien fue puesto en libertad, Mohamed Mahmoud Ahmed Al-Yamani Mohammed, que se encuentra recluido, y Omar Hatem Sayed Ibrahim, que ingresó oficialmente en prisión.

Aplicación de la norma de los seis meses

64. El 5 de marzo de 2020, el Gobierno facilitó información en base a la cual el Grupo de Trabajo resolvió aplicar la norma de los seis meses a cinco casos, relativos a Ahmed Mohamed Elsayed Hussein, Abdulrahman Ali Mahmoud Ali Fatih al-Bab, Kamal Nabil Mohamed Abdullah Fayyad, Ahmed Mosbah Abu Sati Tantawy y Mussaab Mohamed Ismail Elserwi. Quedó confirmado que esos cinco hombres estaban privados de libertad.

Información facilitada por el Gobierno

65. El 5 de marzo de 2020, el Gobierno de Egipto transmitió información sobre dos casos pendientes, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por las fuentes

66. El 9 de abril de 2020, las fuentes facilitaron información sobre un caso, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

“Otra carta” conjunta

67. El 28 de febrero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, “otra carta” relativa a las enmiendas propuestas a la Ley de Entidades Terroristas (Ley núm. 8/2015) y la Ley de Lucha contra el Terrorismo (Ley núm. 94/2015), aprobadas por la Comisión Legislativa del Parlamento el 10 de febrero de 2020. Esas Leyes endurecen las penas para los delitos relacionados con el terrorismo, amplían la definición de financiación del terrorismo e imponen la pena de muerte a los condenados por financiar grupos y actos terroristas.

Llamamiento urgente conjunto

68. El 31 de marzo, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la continuación de la detención arbitraria de los periodistas Mohamed al-Yammani y Mohamed Badr, de cuyos cargos no han informado las autoridades, y a la reclusión, tortura y acoso judicial en curso del defensor de los derechos humanos Patrick George Zaki.

Observación

69. El Grupo de Trabajo sigue preocupado por las denuncias de desapariciones forzadas ocurridas durante el procedimiento de excarcelación y una vez decretada judicialmente la puesta en libertad, así como por las denuncias de desapariciones forzadas de personas que

ya habían sido víctimas de desaparición forzada tras una primera detención y que habían sido absueltas por los tribunales.

70. El Grupo de Trabajo también siguió recibiendo información según la cual los agentes de policía se negaban a hacer pública la documentación oficial sobre los casos de desaparición forzada y alegaban que los métodos descritos por el denunciante se asemejaban a los de las operaciones de la Seguridad Nacional.

71. El Grupo de Trabajo observa con constante preocupación la denuncia sistemática de detenciones practicadas sin mostrar orden judicial alguna ni informar de los motivos, detenciones calificadas como secuestros perpetrados por los efectivos de la Seguridad Nacional.

72. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda los artículos 2 y 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en los que se dispone que ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas y que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. La Declaración también establece la obligación de mantener en todo lugar de detención oficial un registro oficial actualizado de los detenidos (art. 10.3).

India

Procedimiento ordinario

73. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno seis casos, relativos a:

- a) Showkat Ahmad Paul, presuntamente secuestrado el 23 de junio de 2003 en Srinagar (Jammu y Cachemira) por miembros del Ejército de la India;
- b) Bilal Ahmad Sheikh, un niño en el momento de la desaparición, presuntamente secuestrado el 30 de marzo de 1997 en Tengpora Bypass Chowk por efectivos del 20º Batallón de Granaderos del Ejército de la India;
- c) Fayaz Ahmad Beigh, presuntamente secuestrado el 6 de septiembre de 1997 en Srinagar (Jammu y Cachemira) por efectivos del Grupo Operativo Especial (Grupo de Operaciones Especiales);
- d) Ghulam Mohammad Ahangar, presuntamente secuestrado el 10 de junio de 1992 en Srinagar (Jammu y Cachemira) por efectivos del 30º Batallón de la Fuerza de Seguridad de Fronteras;
- e) Naseer Ahmad Wani, presuntamente detenido el 29 de noviembre de 2019 en Rajpora, distrito de Shopian (Jammu y Cachemira) por efectivos del Ejército de la India;
- f) Mohammad Lone Akbar, nacido el 10 de junio de 1965, presuntamente secuestrado el 3 de febrero de 1999 en Ajas, Bandipora (Jammu y Cachemira) por efectivos del 14º Batallón de Fusileros de Rashtriya del Ejército de la India.

Información facilitada por la fuente

74. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Observación

75. Al Grupo de Trabajo le preocupa seguir recibiendo casos relacionados con desapariciones forzadas presuntamente ocurridas en Jammu y Cachemira, incluidos casos de las décadas de 1990 y 2000. Señala que en muchos casos, a pesar de que se interpusieron recursos jurídicos y de que han transcurrido decenios desde que ocurrieron las desapariciones, apenas se ha avanzado en la determinación de la suerte y el paradero de

esas personas. El Grupo de Trabajo también observa con preocupación que ha recibido un caso reciente, ocurrido en 2019.

76. El Grupo de Trabajo desea reiterar que los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas; que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas; que debe realizarse una investigación mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición; y que todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos (artículos 3, 7, 13 y 17 de la Declaración).

77. El Grupo de Trabajo deplora no haber recibido durante años respuesta alguna del Gobierno en relación con los casos transmitidos y espera recibir información pronto. El Grupo de Trabajo espera también que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 16 de agosto de 2010, y a sus recordatorios posteriores.

Irán (República Islámica del)

Información facilitada por las fuentes

78. Las fuentes facilitaron información sobre un caso, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

79. El 19 de febrero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la información recibida sobre las protestas ocurridas en diversas partes de la República Islámica del Irán desde el 11 de enero de 2020 y sobre la presunta respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden, que incluyó el uso excesivo de la fuerza con resultado de lesiones, detenciones y recluciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos a los manifestantes.

Llamamientos urgentes conjuntos

80. El 22 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la información recibida sobre la detención, privación de libertad y condena a muerte de Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi y Mohammad Rajabi, acusados de la comisión de actos de incendio intencionado y de daños materiales durante las protestas ocurridas en Teherán en noviembre de 2019, en el que expresaba su profunda preocupación por la observancia de las debidas garantías procesales y del derecho a juicio imparcial, así como por el presunto empleo de la tortura para arrancar confesiones durante un período de desaparición forzada.

81. El 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la presunta desaparición forzada de Hossein Silawi, Ali Khasraji y Naser Khafajian, miembros de la minoría árabe *ahwazí*, y de Hedayat Abdollahpour, miembro de la minoría kurda. El Grupo de Trabajo teme que corran el riesgo de ser torturados o ejecutados en secreto.

Observación

82. El Grupo de Trabajo recuerda que, según el artículo 10 de la Declaración, toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión. En el párrafo 2 del artículo 10 se dispone que los Estados deben proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares de transferencia, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad. Además, en el párrafo 3 del mismo artículo se exige a los Estados que mantengan en todo lugar de detención un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad.

Respuesta a carta de denuncia conjunta

83. El 18 de febrero de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la carta conjunta de denuncia remitida el 18 de diciembre de 2019 en relación con las protestas que tuvieron lugar en la República Islámica del Irán entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019 y sus consecuencias, en particular las presuntas ejecuciones, lesiones y detenciones arbitrarias de personas que participaban en las protestas a manos de las autoridades nacionales, así como la falta de acceso de los detenidos a representación letrada.

Iraq

Procedimiento ordinario

84. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno tres casos, relativos a:

a) Qassim Mohammed Brism al-Obaidi, ciudadano iraquí nacido el 16 de febrero de 1971, presuntamente víctima de desaparición forzada el 27 de diciembre de 2006 tras detenerse en el puesto de control de Al-Georgia (norte de Baquba), a la sazón bajo la autoridad de la Policía Federal Iraquí;

b) Bassem Mohammed Brism al-Obaidi, ciudadano iraquí nacido el 25 de enero de 1969, presuntamente secuestrado el 25 de enero de 2006 en su domicilio, que fue asaltado en una operación conjunta por efectivos de las fuerzas armadas del Iraq y de los Estados Unidos;

c) Faez Suleiman Jassem Ghadib al-Nuaimi, ciudadano iraquí nacido en 1982, presuntamente detenido el 9 de noviembre de 2004 por las fuerzas de los Estados Unidos tras resultar herido por disparos en Faluya.

Carta de denuncia conjunta

85. El 5 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al caso de los 432 cadetes del campamento Speicher presuntamente desaparecidos en Tikrit desde el 12 de junio de 2014. Los cadetes fueron supuestamente secuestrados por las fuerzas gubernamentales, mientras que más de 1.000 de sus compañeros fueron capturados por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante después de que abandonaran el campamento Speicher.

Denuncias generales

86. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre presuntas dificultades en la aplicación en el Iraq de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La denuncia general (véase el anexo I) se centra en la impunidad generalizada y la persistencia del delito de desaparición forzada en el Iraq, lo que revela la carencia de medidas eficaces dirigidas a exigir cuentas a los funcionarios responsables de los actos de desaparición forzada.

Jordania

Carta de denuncia conjunta

87. El 31 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención y la reclusión arbitrarias del defensor de los derechos humanos Abdulrahman Shdeifat.

Libia

Procedimiento de urgencia

88. El Grupo de Trabajo anunció que, a partir de septiembre de 2019, comenzaría a documentar las vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetrados por

agentes no estatales (A/HRC/42/40, párr. 94). Por ello, durante el período de sesiones a distancia, el Grupo de Trabajo examinó un caso equivalente a acto de desaparición forzada presuntamente perpetrado en la parte del territorio de Libia bajo control del Ejército Nacional Libio¹¹. El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Libia y al Ejército Nacional Libio con arreglo a su procedimiento de urgencia. El caso concierne a Mourad Eddaikra, ciudadano argelino, que presuntamente desapareció el 26 de marzo de 2020 en el centro de detención de Surman, administrado por una milicia bajo la autoridad de Khalifa Haftar.

Procedimiento ordinario

89. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno tres casos, relativos a:

a) Abdallah Muftah Ali Muftah, soldado libio, presuntamente víctima de desaparición forzada el 19 de enero de 2013 mientras visitaba el Departamento de Contabilidad de la Jefatura del Estado Mayor, en Jallat al-Furyan, cerca de Trípoli;

b) Ahmad Abdallah Abd al-Salam Salama, ciudadano libio, presuntamente secuestrado el 28 de enero de 2015 en su domicilio por hombres que, al parecer, eran miembros de la milicia Shrekhan de Misrata, que según se dice dependía del Consejo Militar de Misrata y el Ministerio de Defensa de Libia;

c) Mohamed Khuilad Eblal, ciudadano libio, presuntamente secuestrado el 20 de marzo de 2015 en su despacho en el aeropuerto de Mitiga por tres hombres enmascarados que, al parecer, pertenecían al grupo de milicianos denominado “Batallón al-Bouni”.

Malasia

Procedimiento ordinario

90. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno el caso relativo a Rudangta Sitepu, vista por última vez en noviembre de 2016 en Petaline Java (Selangor). Se cree que su desaparición pudo deberse a su ministerio pastoral cristiano.

91. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo también remitió una copia de la documentación del caso al Gobierno de Indonesia.

Maldivas

Información facilitada por las fuentes

92. Las fuentes facilitaron información sobre un caso, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

México

Carta de intervención inmediata

93. El 20 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata relativa a la reiterada obstrucción a la justicia cometida por las instituciones del Estado en el curso de la investigación de un caso de desaparición forzada, así como los presuntos actos de amenaza e intimidación contra los familiares de la víctima.

¹¹ El Grupo de Trabajo subraya que los casos remitidos al Ejército Nacional Libio no implican en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

Carta de denuncia conjunta

94. El 12 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas contra un grupo de hombres privados de libertad en los estados de Chiapas y Chihuahua, en particular la presunta desaparición forzada por un breve período de una de las víctimas.

Nepal**Carta de denuncia conjunta**

95. El 16 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia en relación con la supuesta omisión de consultas efectivas a las víctimas en relación con la enmienda de la Ley de la Comisión de Investigación de Casos de Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación 2071 (2014).

Nigeria**Procedimiento ordinario**

96. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos, relativos a:

- a) Chinonso Paul Nnadozie, presuntamente aprehendido el 7 de septiembre de 2017 en el puesto de control del Ejército en Ubakala, en el área de gobierno local de Umuahia North, en el estado de Abia (Nigeria Oriental), por soldados de la 14ª Brigada del Ejército de Nigeria, ubicada en Ohafia (estado de Abia);
- b) Daniel Kalu Agwu Chukwudi, presuntamente secuestrado el 30 de mayo de 2016 en Nkpor Junction (estado de Anambra) por el ejército de Nigeria.

Pakistán**Acción urgente**

97. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno tres casos, relativos a:

- a) Imran Khan Kaleri Baloch, presuntamente secuestrado en el campo de fútbol del Degree College, Kandiaro, distrito de Naushahro Feroze, provincia de Sind, el 14 de febrero de 2020 por efectivos de la policía y miembros de los Rangers del Pakistán;
- b) Daniyal Waheed, presuntamente secuestrado en su domicilio en Lahore el 14 de noviembre de 2019 por miembros los Rangers del Pakistán;
- c) Abdul Aziz Chang, presuntamente secuestrado a la entrada de su casa en Jamshoro, provincia de Sind, el 31 de enero de 2020 por un oficial jefe de comisaría.

Procedimiento ordinario

98. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno 15 casos, relativos a:

- a) Amal Khan, presuntamente secuestrado en la carretera de Kohat (Peshawar) el 7 de agosto de 2009 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- b) Wali Rehman, presuntamente secuestrado en su domicilio en Koza Bandi, distrito de Swat, en agosto de 2009 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;

- c) Khan Mada Smir, presuntamente secuestrado en una comisaría del distrito de Lakki Marwat el 21 de diciembre de 2019 por hombres vestidos de civil que podrían pertenecer a un organismo de los servicios secretos del Estado;
- d) Muhammad Idris Khattak, presuntamente secuestrado cerca de la salida hacia Swabi de la autopista Islamabad-Peshawar el 13 de noviembre de 2019 por hombres vestidos de civil que podrían pertenecer a un organismo militar;
- e) Muhammad Akram, presuntamente secuestrado en la sucursal principal del Banco Nacional en Gojra el 19 de junio de 2018 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- f) Muhammad Jamil, presuntamente secuestrado en un taller en Multan el 3 de mayo de 2015 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- g) Umer Kursheed Khan, presuntamente secuestrado en el mercado de Satellite Town (Rawalpindi) el 18 de enero de 2019 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- h) Muhammad Hamza Ali, presuntamente secuestrado en su domicilio el 20 de junio de 2018 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- i) Hafiz Muhammad Umer Farooq, presuntamente secuestrado en Muslim Town (Lahore) el 12 de marzo de 2013 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- j) Muhamad Tahir, presuntamente secuestrado en el bazar de la Colonia Pastún (Karachi) el 3 de abril de 2011 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- k) Mano, presuntamente secuestrado en una casa en Bara Bandai el 28 de noviembre de 2009 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- l) Shair Ullah, presuntamente secuestrado en su tienda en Bank Road (Rawalpindi) el 4 de agosto de 2016 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- m) Muhammad Zahid, presuntamente secuestrado en su domicilio el 10 de julio de 2017 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- n) Muhammad Shahzad, presuntamente secuestrado en su domicilio, en el distrito de Khanpure, el 10 de julio de 2017 por miembros de una agencia secreta, posiblemente la Inteligencia Militar, los servicios de inteligencia Inter-Service o la Oficina de Inteligencia;
- o) Israel Israel, presuntamente detenido en la Colonia Machar, Karachi, provincia de Sind, el 1 de octubre de 2017 por efectivos de los servicios secretos vestidos de civil que lo condujeron a un lugar desconocido.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

99. A la vista de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos nueve casos, relativos a Imran Wali Muhammad, Muhammad Nawaz Atta, Rafeeq Baloch, Sher Jan, Ganj Bakhsh, Jeand Baloch, Najeem Ahmed, Muhammad Haneef y Ahmed Aqeel. Según se informó, esos hombres han sido puestos en libertad.

Información facilitada por las fuentes

100. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Filipinas**Procedimiento ordinario**

101. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Nestor Dela Cerna, presuntamente secuestrado el 5 de marzo de 2018 en Valenzuela por hombres armados y enmascarados, uno de los cuales vestía uniforme de policía;

b) Reynaldo Jr. Brillante, presuntamente secuestrado en Quezon el 9 de octubre de 2018 por agentes de policía no identificados.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

102. A la vista de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 12 casos.

Aplicación de la norma de los seis meses

103. A la vista de la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses al esclarecimiento de 15 casos.

Información facilitada por el Gobierno

104. El Gobierno transmitió información sobre 185 casos pendientes, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de intervención inmediata

105. El 15 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con el presunto asesinato de los defensores de los derechos humanos Ryan Hubilla y Nelly Bagasala, así como con las presuntas amenazas, detenciones arbitrarias y actuaciones judiciales contra otros defensores de los derechos humanos miembros de las organizaciones Karapatan, Gabriela y Rural Missionaries of the Philippines, que se ocupan entre otras cosas de los actos de desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Las personas afectadas fueron, entre otras, Elisa Tita Lubi, Cristina Palabay, Reylan Vergara, Roneo Clamor, Kiri Dalena, Edita Burgos, Wilfredo Ruazol, Jose Mari Callueng, Elenita Belardo, Emma Cupin, Gertrudes Libang, Joan May Salvador, Jennefer Aguhob, Alexander Philip Abinguna, Mira Dalla Legion, Frenchie Mae Cumpio, Marissa Cabaljao y Mariel Albez Domequil.

Observación

106. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno los esfuerzos realizados para facilitar información actualizada sobre los numerosos casos pendientes. El Grupo de Trabajo procurará atender el resto de las respuestas recibidas lo más rápidamente posible en futuros períodos de sesiones.

107. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a la solicitud de visita al país, transmitida el 3 de abril de 2008, y a sus recordatorios posteriores.

República de Corea

Respuesta a carta de denuncia conjunta

108. El 28 de febrero de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la carta de denuncia conjunta remitida el 28 de enero de 2020, relativa a la presunta deportación a la República Popular Democrática de Corea de dos ciudadanos de ese país que, al parecer, fueron capturados el 2 de noviembre de 2019.

Federación de Rusia

Procedimiento ordinario

109. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 11 casos, relativos a:

- a) Gyeong-Chul Sin, que tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- b) In-Seon Lee, que tenía 32 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez por una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- c) Seong-Su Oh, que tenía 34 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- d) Yeon-Bong Chung, que tenía 37 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- e) Dong-Gae Park, natural de Daegu-si (República de Corea), que tenía 44 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- f) Bong-Gyu Chung, que tenía 35 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- g) Seok-Gyu Jin, que tenía 25 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- h) Mun-Sik Choi, que tenía 34 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- i) Tae-Gyu Chung, que tenía 36 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- j) Shin-Hun Chang, que tenía 31 años cuando ocurrieron los hechos y de quien se supo por última vez gracias a una carta remitida desde Sajalín del Sur, en la actual Federación de Rusia, en junio de 1950, justo antes del estallido de la guerra de Corea;
- k) Yuri Karpov, presuntamente secuestrado el 29 de agosto de 2014 por grupos armados de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en la zona de Mnogopolye/Starobeshevo, en Donetsk. También se denunció que actualmente está detenido en Rostov del Don (Federación de Rusia).

Información facilitada por las fuentes

110. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Arabia Saudita**Carta de denuncia conjunta**

111. El 6 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta detención y privación de libertad arbitrarias en la Arabia Saudita, desde el 1 de marzo de 2019, de la princesa saudita Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud y su hija Suhoud al-Sharif.

Denuncias generales

112. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre presuntas dificultades en la aplicación en la Arabia Saudita de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La denuncia general (véase el anexo I) se centra en la insuficiente protección jurídica contra los actos de desaparición forzada, la falta de independencia judicial, la existencia de normas y prácticas de investigación que coadyuvan a la ocurrencia de actos de desaparición forzada y la cultura de la impunidad.

Sri Lanka**Procedimiento ordinario**

113. El Grupo de Trabajo transmitió 31 casos al Gobierno (véase el anexo II).

Información facilitada por las fuentes

114. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

115. El 11 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las políticas contra la desaparición forzada en el país y a las recientes declaraciones del Gobierno sobre la cuestión.

Observación

116. El Grupo de Trabajo reitera la importancia de que, entre otras cosas, se respete escrupulosamente la independencia de la Oficina de Personas Desaparecidas y se le proporcionen recursos suficientes para cumplir eficazmente su mandato. También reitera que la investigación de todos los casos debe continuar hasta que se determine la suerte de la persona desaparecida y que, incluso en caso de fallecimiento, Sri Lanka debe adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos, de conformidad con los artículos 12 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Grupo de Trabajo también destaca la importancia de garantizar la protección y la confidencialidad de las pruebas reunidas por la Oficina.

117. Además, el Grupo de Trabajo subraya que las personas, en particular los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, deben ser protegidos contra toda forma de intimidación o malos tratos y que el Gobierno garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas, de

conformidad con los artículos 12 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

118. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción las garantías de que Sri Lanka seguirá participando de manera constructiva en los procesos y mecanismos ordinarios de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, y espera recibir información detallada sobre las políticas previstas por el Gobierno para luchar contra la desaparición forzada en el país y cumplir las obligaciones que le conciernen en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Grupo de Trabajo reitera su disposición a ayudar a Sri Lanka en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo en el informe sobre su misión a Sri Lanka (A/HRC/33/51/Add.2) y en el informe de seguimiento (A/HRC/42/40/Add.1).

República Árabe Siria

Procedimiento ordinario

119. El Grupo de Trabajo transmitió 36 casos al Gobierno (véase el anexo II).

Observación

120. El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por los informes que recibe sin cesar sobre niños que, junto con sus padres, han sido víctimas de desaparición forzada en la República Árabe Siria. Todos los niños deben gozar de una protección especial de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos y con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los niños deben ser siempre tratados principalmente como víctimas, teniendo siempre presente su interés superior. A este respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar al Gobierno de la República Árabe Siria la obligación que le incumbe en virtud del artículo 20 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que exige que los Estados prevengan y repriman la apropiación de hijos de padres víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de desaparición forzada. También requiere que los Estados se esfuercen por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen.

121. El Grupo de Trabajo pide a las autoridades de la República Árabe Siria que pongan fin de inmediato a las desapariciones forzadas e impidan que se produzcan; busquen y localicen a las víctimas; realicen investigaciones transparentes, independientes y eficaces de esos abusos, con particular interés en los fallecimientos notificados de personas recluidas; exijan responsabilidades a los autores; y proporcionen reparación a las familias de los desaparecidos.

Tailandia

Carta de denuncia conjunta

122. El 20 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta relativa al marco jurídico nacional y la exclusión de los pueblos indígenas de la gestión forestal en Tailandia, así como a la presunta impunidad con la que se cometen asesinatos y actos de desaparición forzada contra los defensores de los derechos humanos y a los desalojos forzosos de los miembros de la comunidad karén.

Turquía

Información facilitada por el Gobierno

123. El 10 de abril de 2020, el Gobierno de Turquía transmitió información sobre 17 casos pendientes, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Aplicación de la norma de los seis meses

124. El 10 de abril de 2020, el Gobierno facilitó información en base a la cual el Grupo de Trabajo decidió aplicar a un caso la norma de los seis meses.

Información facilitada por las fuentes

125. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

126. El 26 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta muerte de un palestino privado de libertad, el cual también había sido presuntamente víctima de desaparición forzada.

127. El 22 de mayo de 2020, el Gobierno de Turquía respondió a la carta de denuncia conjunta.

128. El 22 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia conjunta relativa al presunto maltrato físico infligido a dos ciudadanos iraníes y su expulsión de Turquía al Irán (República Islámica del).

129. El 5 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia conjunta relativa a la práctica, al parecer sistemática, de secuestros extraterritoriales patrocinados por el Estado y a la devolución forzosa de nacionales turcos desde numerosos Estados a Turquía. Al parecer, por lo menos 100 personas sospechosas de estar implicadas en el movimiento Hizmet o de Gülen han sido objeto de detención y reclusión arbitrarias, desaparición forzada y actos de tortura en el marco de operaciones encubiertas presuntamente organizadas o instigadas por el Gobierno de Turquía en coordinación con las autoridades del Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Camboya, el Gabón, Kazajistán, el Líbano y el Pakistán, entre otros, así como de Kosovo¹².

130. El 11 de junio de 2020, el Gobierno de Turquía respondió a la carta de denuncia conjunta.

Observaciones

131. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno de Turquía siga haciendo caso omiso de las graves denuncias de vulneraciones de los derechos humanos ocurridas durante la devolución forzosa de nacionales turcos desde terceros países a Turquía. Preocupa asimismo al Grupo de Trabajo que la aparente falta de rendición de cuentas por esas vulneraciones pueda poner a más ciudadanos turcos en peligro de desaparición forzada, ya sea en terceros países antes de la deportación o en su tránsito hacia Turquía.

132. A este respecto, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno de Turquía a que lleve a cabo sin demora investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales de esas denuncias con el fin de hacer efectivo el derecho de las presuntas víctimas y sus familiares a un recurso efectivo. Al instar a Turquía a poner fin de inmediato a esas prácticas y prevenirlas, el Grupo de Trabajo recuerda los artículos 2 y 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en los que se dispone que ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas y que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas.

¹² Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

Turkmenistán

Esclarecimiento

133. A la vista de la información facilitada anteriormente por el Gobierno y las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Gutgeldy Annaniyazov, que, según la información recibida, se encuentra privado de libertad.

Ucrania

Procedimiento ordinario

134. En septiembre de 2019, el Grupo de Trabajo anunció que empezaría a documentar las vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetradas por agentes no estatales (A/HRC/42/40, párr. 94). En consecuencia, durante el presente período de sesiones, examinó seis casos equivalentes a actos de desaparición forzada presuntamente perpetrados en el territorio controlado por la autoproclamada “República Popular de Donetsk”¹³. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno de Ucrania y a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” los casos relativos a:

- a) Vladimir Svirskii, presuntamente secuestrado el 24 de agosto de 2014 por grupos armados asociados a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” en Kuteinikovo, distrito de Amvrosievskiy (Donetsk);
- b) Andrey Slabous, presuntamente secuestrado el 29 de agosto de 2014 por grupos armados asociados a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” en la circunscripción de la localidad de Mnogopolye (Donetsk);
- c) Oleg Nerevenko, presuntamente secuestrado el 29 de agosto de 2014 por grupos armados asociados a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” durante la batalla de Ilovaisk, en Donetsk;
- d) Oleg Kurochka, presuntamente secuestrado el 29 de agosto de 2014 por grupos armados de la autoproclamada “República Popular de Donetsk” en la zona de Starobeshevo (Donetsk);
- e) Oleksandr Plekhanov, presuntamente secuestrado el 1 de julio de 2015 por grupos armados asociados a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” en el distrito de Kuibyshevskiy (Donetsk);
- f) Oleg Shevandin, presuntamente secuestrado el 1 de mayo de 2015 por grupos armados asociados a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” durante la batalla de Ilovaisk, en Donetsk.

Información facilitada por un actor no estatal

135. Los días 16 y 27 de abril de 2020, representantes de la autoproclamada “República Popular de Donetsk” facilitaron información sobre tres casos pendientes, pero se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por las fuentes

136. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

¹³ El Grupo de Trabajo subraya que los casos remitidos a la autoproclamada “República Popular de Donetsk” no implican en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

Estados Unidos de América

Carta de denuncia conjunta

137. El 15 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al mantenimiento en reclusión de Ammar al-Baluchi, quien había estado detenido por la Agencia Central de Inteligencia en la Bahía de Guantánamo y fue víctima de desaparición forzada.

Venezuela (República Bolivariana de)

Acción urgente

138. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dos casos, relativos a:

a) Tomeu Vadell Recalde, presuntamente desaparecido el 5 de febrero de 2020 en un edificio residencial en El Paraíso (Caracas), donde se encontraba en arresto domiciliario bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional;

b) Rubén Darío Fernández Figueroa, presuntamente desaparecido el 11 de marzo de 2020 del 131^{er} Batallón de Infantería Manuel Piar en el municipio de Guajira, estado de Zulia.

Información facilitada por la fuente

139. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Esclarecimiento

140. A la vista de la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso, al que había aplicado la norma de los seis meses en su 119^o período de sesiones (A/HRC/WGEID/119/1, párr. 125), relativo a Ígbert José Marín Chaparro. Según se informó, el Sr. Marín Chaparro se encuentra recluido.

Viet Nam

Acción urgente

141. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, en virtud de su procedimiento de urgencia, un caso relativo a Thi Ha Truong, quien presuntamente desapareció el 26 de marzo de 2020 tras cruzar la frontera de la República Democrática Popular Lao a Viet Nam.

Información facilitada por las fuentes y por el Gobierno

142. El 15 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Thi Ha Truong a la vista de la información facilitada por las fuentes. Según se informó, había reaparecido en una instalación de cuarentena. Además, el Gobierno transmitió una respuesta al caso el 26 de mayo de 2020.

Llamamiento urgente conjunto y respuesta

143. El 31 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con la presunta detención arbitraria y posible desaparición forzada de Truong Thi Ha mientras cruzaba la frontera de la República Democrática Popular Lao a Viet Nam. El Gobierno respondió el 26 de mayo de 2020.

Annex I

[English and French only]

General allegations

Algeria

1. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a reçu, de la part de sources crédibles, des informations relatives à des obstacles rencontrés dans l'application des dispositions de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en Algérie.
2. Selon les sources, de graves violations de droits humains ont été commises dans les camps de réfugié.e.s Sahraoui.e.s près de la ville de Tindouf en Algérie, par les forces du Front Polisario et ce, de manière systématique. Ces violations auraient pris plusieurs formes : enlèvements, disparitions forcées ou involontaires, exécutions extrajudiciaires et torture.
3. Selon ces mêmes sources, lors du conflit au Sahara occidental, le Front Polisario aurait organisé le déplacement massif et souvent forcé de centaines de Sahraoui.e.s, incluant des femmes et des enfants, de différentes parties du territoire du Sahara occidental, du nord de la Mauritanie, du Mali et du Niger dans ces camps. Il a été rapporté que le gouvernement algérien a cédé ses responsabilités au Front Polisario pour gérer la vie quotidienne à l'intérieur des camps et en avoir le contrôle sur la gestion et l'organisation. Un nombre important de personnes auraient été victimes de disparitions forcées ou involontaires dans ces camps de réfugié.e.s Sahraoui.e.s.
4. La disparition forcée dans les camps de Tindouf, qui regroupent notamment les camps Smara, Dakhla, Aousserd, Laayoune, Boujdour et Rabouni, aurait été une pratique systématique contre tout.e réfugié.e Sahraoui.e qui exprimerait des opinions différentes ou opposées à celles propagées par le Front Polisario. Il a été allégué que les victimes auraient été enlevées de leurs tentes, enfermées dans des centres secrets, exécutés et enterrés anonymement dans des tombes clandestines individuelles.
5. En effet, il a été rapporté que les lieux de détention des réfugié.e.s au sein des camps et sous le contrôle du Front Polisario sont tenus secrets. Selon les informations communiquées au Groupe de travail, plusieurs témoignages de survivant.e.s concordent notamment sur la localisation de la prison d'Errachid, prison non-officielle, qui a été dénoncée comme étant un lieu de nombreuses pratiques de torture entraînant souvent la mort des victimes. Il a ainsi été rapporté 130 cas de disparitions forcées au sein de cette prison.
6. De plus, d'autres centres secrets de détention ont été signalés par les sources, tels que les prisons Dheibiya, Hamdi Abba Cheikh, Said Berhi, Elghazouani, Mohamed Sayed, Adem Rih, Martyre Haddad, Dakhla, "Centre 5", Al Hilal, et la prison dite du "12 Octobre" dans la périphérie de Rabouni. Il a également été rapporté l'existence de prisons pour femmes, dont l'une serait localisée entre les camps Aousserd et Smara, et l'autre à côté de l'hôpital de Rabouni. De plus, il a été allégué que d'autres centres de détention se trouvaient dans des lieux plus reculés, particulièrement dans les régions militaires, telles que Dougaj, Aghouinit, Mijek, Mehaires, Tifariti, Bir Lahlou, et Zoug.
7. Il a été allégué que d'autres violations graves de droits humains ont eu lieu dans les camps de Tindouf. Parmi les victimes de ces violations signalées par les sources figurent notamment des mineur.e.s. En premier lieu, de nombreux cas de torture ont été rapportés, dont les survivant.e.s portent encore les traces des blessures. Les allégations de torture sont particulièrement nombreuses et détaillées concernant les prisons d'Errachid et de Dheibiya. Il a été rapporté que les personnes étaient détenues dans des cellules qui étaient des trous creusés dans le sol, et avaient les yeux bandés, les mains et les pieds attachés. Selon les informations reçues, plusieurs traitements violents et inhumains auraient causé la mort d'un

grand nombre des victimes. En plus des conditions de détention insalubres telles que la sous-nutrition, la mauvaise hygiène, le développement de maladies par les détenu.e.s sans accès à des traitements, les périodes d'isolement longues et injustifiées, et l'interdiction de visite de la famille, il a été rapporté que la torture était quotidienne, et que plusieurs corps étaient enterrés clandestinement tous les jours.

8. Selon les informations communiquées, ces camps de détention étaient des lieux d'exécutions extra-judiciaires. Les sources rapportent notamment des cas de viols répétés sur mineur.e.s, qui auraient ensuite été exécuté.e.s, ainsi que les membres de leur famille. A été rapporté ainsi le cas d'une enfant enlevée à l'âge de douze ans avec son père en 1978. Elle aurait été placée dans le camp de Rabouni, violée et tuée alors que les premiers signes d'une grossesse apparaissaient, pour être enterrée dans un lieu inconnu. Son père aurait été placé en détention dans la prison d'Errachid, endurant des années de torture puis tué également afin de dissimuler le crime. Il a également été rapporté que certains décès résultant de la torture auraient été mis en scène en tant que suicides, et enregistrés comme tels.

9. Selon les informations reçues, de nouveaux cas de disparitions forcées ont été rapportés. Ainsi, des cas de disparitions forcées de citoyen.ne.s malien.ne.s illégalement placé.e.s en détention sans aucun contrôle judiciaire dans les centres de détention secrets du Polisario ont été signalés. Les sources ont également porté de nouveaux à l'attention du GTDFI le cas de Khalil Ahmed Braih, conseiller de l'ancien SG du Polisario Mohamed Abdelaziz, qui aurait disparu dans des circonstances mystérieuses en 2009 de la prison militaire de Blida en Algérie, après avoir été arrêté par les services de sécurité algériens à Alger, où il était allé donner une conférence sur les droits humains à l'Université. Le GTDFI avait initialement transmis le cas au gouvernement de l'Algérie en 2014 sans réponse à ce jour.

10. Selon les sources, des insuffisances flagrantes existeraient quant au respect du droit à la vérité. Il a été rapporté notamment le cas d'enfants de victimes de disparitions forcées, nés, dans les camps de réfugié.e.s. Les sources rapportent que plusieurs réfugiés auraient été enlevés et torturé à la prison d'Errachid, tandis que les membres du Front Polisario prétendaient que ces personnes étaient mortes au combat, se sacrifiant pour le Front. Les familles des victimes étaient alors dans l'incapacité de revendiquer leur droit de connaître la vérité autour de la mort de leur proche et d'accéder à la justice et à la réparation.

11. Il a été rapporté que les familles des victimes ont pris les mesures nécessaires afin de connaître la vérité. Ainsi par exemple, elles ont adressé une lettre au 15ème Congrès du Polisario tenu en décembre 2019 et au ministère algérien des Affaires étrangères, demandant l'établissement de la vérité et de la responsabilité pour les disparitions forcées dans la prison d'Errachid. Cependant, il a été rapporté que les familles sont ignorées et démenties par les dirigeants du Polisario et les autorités algériennes.

12. Selon les sources, les autorités algériennes ne semblent pas disposées à prendre des mesures pour déterminer le sort des victimes de disparition forcée dans les centres de détention du Polisario et refuseraient toujours de fournir toute information pertinente dont ils disposent sur le sort des victimes, y compris où elles se trouvent ou, si elles sont décédées, les circonstances et la cause de leur mort ou le lieu de leur inhumation.

13. Enfin, selon les informations reçues, des obstacles sont rencontrés quant à l'application du droit à la justice. Selon les sources, à ce jour les auteurs jouissent d'une impunité totale. En effet, il a été allégué qu'aucune mesure n'a été prise pour garantir des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces et pour garantir la poursuite de tous les crimes liés aux personnes disparues sur le territoire algérien. Par conséquent, le droit à la réparation des victimes n'est pas non plus garanti.

14. La situation de violation des droits humains au sein des camps Tindouf et l'absence d'accès effectif à la justice pour les victimes ont été dénoncées à de multiples reprises par la communauté internationale et les organisations non gouvernementales. Le Groupe de travail a déjà transmis le 13 mars 2018 une allégation générale¹ à l'Etat algérien concernant

¹ See A/HRC/WGEID/114/1, Annex I.

des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la *Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées* dans les camps de Tindouf. Il avait déjà été rapporté des disparitions de prisonniers dans ces camps, pour lesquelles les familles des victimes mènent depuis de nombreuses années des actions auprès des autorités, sans qu'aucune information ne leur soit apportée. Le Gouvernement de l'Algérie avait répondu le 7 juin 2018².

Iraq

15. The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances received information from reliable sources on obstacles encountered in the application of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances in Iraq.

16. According The Working Group received information concerning alleged violations and obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in Iraq.

17. It is reported that despite the documenting of continued enforced disappearances in Iraq by Iraqi security forces authorities in Baghdad and in the Kurdistan Region have done little to punish officers implicated in disappearances.

18. The source provided information on documented instances of enforced disappearance in Iraq between 2014 and 2020 as summarised in the following paragraphs.

Human Rights Watch Recorded cases of enforced disappearances between 2014 and 2017

19. According to information received, between April 2014 and October 2017, 78 cases of enforced disappearance were recorded by Human Rights Watch in Iraq. Of the 78 cases concerning both men and boys, thirty-four were detained by military and security forces at checkpoints during screening procedures as part of operations to counter ISIS; while another thirty-seven were taken from their homes. Thirty-three cases of enforced disappearances that occurred at checkpoints targeted people who were from or lived in areas that were under ISIS control. Those who were arrested at home were not given any information as to the reason for their arrest. However, relatives suspected that arrests were linked to their identity as Sunni Arabs. In at least six cases, the circumstances of the arrest allegedly indicated that they were carried out in relation to the fight against ISIS. In three of these cases, the arresting officers reportedly used excessive force leading in one case to the death of a relative. The 78 victims of enforced disappearance were detained either by the Popular Mobilization Forces (hereafter PMF) -allegedly under the control of the Prime Minister- or by the National Security Service and kept in unofficial places of detention. Those who reappeared were detained during 34 to 130 days and all reported having been subjected to torture.

20. It is reported that none of the families of the 78 victims of enforced disappearances had a clear idea of which authority they should contact to inquire about their fate and whereabouts of their relative. Thirty-eight families requested information regarding their missing relative from Iraqi authorities but received no information, while the other families had not sought information, fearing inquiries would seriously jeopardize their relatives' safety.

21. The source reported having transmitted, in June 2018, communications to the human rights adviser of the Prime Minister's Advisory Council in Baghdad and to the Kurdistan Regional Government's coordinator for international advocacy containing a list of the disappeared, indicating approximate dates and locations where they were last seen. On 18 September 2018, the Kurdistan Regional Government responded with information about the number of individuals its forces detained on the basis of suspected affiliation with ISIS and provided details regarding its arrest procedures. The response did not include any information on the fate and whereabouts of any of the victims listed in the communication

² See A/HRC/WGEID/116/1, p.19.

by the source. Authorities in Bagdad never provided a response. According to the information provided by the source, the families of the cases who were brought to the attention of the authorities have not yet received any information on their whereabouts.

22. The source further reported that during the June-July 2016 military operations by Iraqi security forces against the Islamic State in the city of Fallujah in Anbar governorate, government forces carried out summary executions, enforced disappearances, and mutilation of corpses and beatings of unarmed men. On 5 June 2016, 600 men detained during the operation, most of whom belonged to the Mahamda clan, were released by security forces in the Hayy al-Shuhada area in Saqlawiva. These men reported that PMF fighters had taken away at least another 600 Mahamda men whose fate and whereabouts remained unknown.

23. In the first days of the military operation, Iraqi security forces forced civilians living in a town called Karma to leave the area, causing an exodus during which at least 70 young men disappeared, their families have no information about their whereabouts. The number of missing men was confirmed to the source by a member of the Anbar governorate council. On 4 June 2016, then-Prime Minister Haider al-Abadi launched an investigation into abuses in Fallujah and ordered to arrest those responsible for “transgressions” against civilians. On 7 June 2016 al-Abadi announced the “detention and transfer of those accused of committing violations to the judiciary to receive their punishment according to the law.”

In December 2019, five hundred bodies were discovered in a mass grave just outside Fallujah by the Iraqi authorities. The families assumed they were the remains of missing men from the Mahamda clan. According to the source, the authorities have not yet carried out any exhumation of the site, nor confirmed to the families of the disappeared whether the bodies belong to their missing relatives.

Disappearances of ISIS Suspects

24. In March 2017, the Iraqi Ministry of Interior held at least 1,269 detainees, including boys as young as 13 years old, without charge, in terrible conditions, with limited access to medical care, in three makeshift prisons, two of which are located in Qayyarah and the third one at a local police station in Hammam-al-Alil. On 2 February 2017, Justice Minister Haidar al-Zamili informed the source that neither the detainees in Qayyarah nor those charged with terrorism under the counterterrorism law (Law no. 13/2005) had been allowed to communicate with their families during the investigation period. Since 2016, many Iraqi families informed the source of the detention of their relatives on charges of ISIS affiliation and their inability to obtain information about their whereabouts. It is reported that the Iraqi army screened and detained men fleeing Mosul at an unidentified detention centre. These men were held without any possibility to communicate with the outside world. On 10 January 2017, the source received information that PMF fighters were coming to the screening site daily at night to take away groups of men. The men were taken regardless of whether their name figured on a list drawn by the authority with the identity of those “wanted” for ISIS affiliation. The detention of these men due to a presumed ISIS affiliation was confirmed to the source by a PMF fighter. The fate and whereabouts of these men is unknown.

Detention of Children in the Kurdistan Region of Iraq

25. The source reported the detention of children in the Kurdistan Region of Iraq. In November 2018, the source interviewed 20 boys aged 14 to 17 charged or convicted of ISIS affiliation at the Women and Children’s Reformatory in Erbil (one of three facilities holding children in the Kurdistan Region of Iraq). It is reported that 63 children were being held at the prison for terrorism-related charges, including 43 who had been convicted. All of the boys indicated that they were not allowed to communicate with their families while under the custody of the Kurdistan Regional Government’s security forces, Asayish, until they were taken to the reformatory where they were allowed to have family visits prior the trial. However, most of them were reportedly denied telephone calls after conviction, making it impossible for some of them to inform their families of their whereabouts. While the regional government’s coordinator for international advocacy informed that families were notified of the detention of their child and that detained children are allowed to call

their families in presence of officers of the Asayish, the prison staff reported that the Asayish determined whether detainees can receive visits or telephone calls.

Disappearances of Detainees in Kirkuk

26. The source also reported disappearances of detainees in Kirkuk. In 2017, 350 detainees held by the Kurdistan Regional Government in the city of Kirkuk were feared to have been forcibly disappeared. Those missing were mainly Sunni Arabs, internally displaced to Kirkuk or residents of the city, detained by the Asayish on suspicion of ISIS affiliation after the regional forces took control of Kirkuk in June 2014. Local officials reportedly indicated that when Iraqi federal forces regained control of the area on 16 October 2017, the detainees were no longer present in the official or unofficial detention facilities in Kirkuk. Following demonstrations in Kirkuk on 7 November 2017 demanding information on people allegedly detained by Asayish forces, then Prime Minister Haider al-Abadi requested an investigation on the disappearances. However, on 8 November 2017, the former head of the security committee of Kirkuk's provincial council, reportedly denied any involvement of the Asayish forces in any disappearances and blamed these on US forces previously present in Kirkuk. Kirkuk's acting governor and a Kirkuk police chief reported that following the protest, Asayish forces handed 105 detainees over to Iraqi federal forces in Kirkuk. These detainees were first held in Kirkuk and then transferred to facilities in Sulaimaniya. Families have submitted complaints to the Kirkuk branch of Iraq's Human Rights Commission regarding the disappearance of at least 350 other men whom the Kurdistan Regional Government had allegedly detained in and around Kirkuk.

27. Between August 2015 and October 2017, 27 Sunni Arab men were witnessed being arrested by identifiable Asayish forces in Kirkuk or south of the city. Relatives of the 27 men have not been able to communicate with them since their arrest, nor receive any official information about their whereabouts. For all 27 cases, relatives reported that they had asked local Asayish forces or local police about their relatives but never received an official acknowledgement of their detention or information about where they were being held or why. In some cases, relatives reported that they were able to obtain information from informal channels indicating that their relatives were being held by the Asayish forces in other parts of the Kurdistan Region.

28. In 2017, detainees who were released from the al-Salam military base, informed four families that their disappeared relatives were being held at this location. The Asayish forces allegedly run a number of informal detention facilities in Sulaimaniya.

Disappearances linked to the October 2019-March 2020 Protests

29. It is further reported that enforced disappearances occurred in the context of the October 2019-March 2020 protests. These protests started in Baghdad and other cities in central and southern Iraq on 1 October 2019. Seven people, including a 16-year-old boy, were reported missing on 7 October in and around Baghdad's Tahrir Square, where they were participating in ongoing demonstrations. As of 2 December 2019, four of them were still missing. Their relatives inquired about them at police stations and government offices, to no avail.

30. Nine other cases were reported of persons who had been detained at the protests and subsequently went missing. However persons associated with the nine reported cases were allegedly too frightened to share details as they feared it could impact on the safety of the missing relative.

31. The source documented in details a number of abductions followed by a period of disappearance.³ These included:

(a) A woman abducted on 2 November 2019 while she was on her way home after having distributed food, water, and first aid kits to protesters in Tahrir Square. She

³ See Human Rights Watch submission to the WGEID, <https://www.hrw.org/news/2020/05/18/iraq-human-rights-watch-submission-working-group-enforced-or-involuntary>.

was released on 13 November 2019 and had been kept blindfolded for the entire period of her enforced disappearance;

(b) A man abducted on 7 October 2019 during the first wave of protests and released on 24 October 2019;

(c) A man arrested on 20 November 2019 without being able to contact anyone. He was reported missing and a complaint was filed at a local Baghdad police station. He was released on 28 November 2019 and reported that he had been arrested by federal police at a checkpoint on his way to the 20 November protests. On 21 November, he was reportedly presented to a judge, who told him that no charges were being brought against him. However, he remained under custody incommunicado until his release. He was therefore forcibly disappeared between 20 and 28 November;

(d) A man who was last seen on 22 October 2019 at the Tahrir Square protest. Despite inquiries at four police stations, his fate and whereabouts remained unknown as of December 2019;

(e) A man who was last seen on 28 October 2019 at the front line of the protests. His relatives inquired about him at police stations and government offices, to no avail. He was still missing as of December 2019;

(f) A woman reportedly abducted on 8 November 2019 at the protests after having posted a video of herself on Facebook criticizing the prime minister and expressing support for the protesters. Relatives inquired about her in two police stations in Baghdad, to no avail. She was released on 12 November 2019;

(g) A 16-year-old boy forcibly disappeared on 28 November 2019 after he went to Tahrir Square to protest. Relatives inquired about him in three police stations, to no avail. He was still missing as of December 2019.

Saudi Arabia

32. The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances received information from reliable sources on obstacles encountered in the application of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances in Saudi Arabia.

33. According to the information received, the existing legal framework in Saudi Arabia does not offer sufficient protection against enforced disappearance. The unchecked and increased concentration of power with the royal authority which has undermined judicial independence, has contributed to a culture of impunity, and investigative rules and practices have fostered the occurrence of enforced disappearances. Enforced disappearances have also been the result of a repressive environment against manifestations of free speech and peaceful assembly. Detention and disappearance have been used as tools to suppress beliefs and behaviours that do not align with state-sanctioned political and religious dogma.

Trends and manifestations of enforced disappearance in the Kingdom of Saudi Arabia

34. It is reported that although the widespread use of enforced disappearance is concealed behind a culture of secrecy, accessible information indicates clear trends of occurrence of both short and long term enforced disappearances. Sources allege that recorded cases suggest a trend whereby enforced disappearance is used to specifically target and silence dissenting voices, particularly those of human rights defenders, journalists and religious figures. Such disappearances are generally short-term, with victims often 'reappearing' and subjected to unfair trials. Enforced disappearances is allegedly used as a subjugation technique and interrogation practice targeting dissenting voices.

35. Disappearances occur through various means such as the use by intelligence services of arrest without warrants whereby victims are abducted by officers in plain clothes who do not present any paperwork nor explain the reasons for the arrest. The intelligence services use their extensive powers in security operations in both legitimate operations and politically motivated ones. Often individuals are abducted from their homes, during the

evening or late at night. This *modus operandi* has reportedly been observed in a number of cases documented by the sources.

36. Reportedly, persons abducted in such ways are taken to an unknown location where they are forcibly disappeared for anywhere between a few days to several years. In cases for which the whereabouts eventually becomes known, the victims are held incommunicado, and in solitary confinement, for extended periods of time, or reappear before prosecutors in order to be charged and put on trial.

37. It is further reported that the secret police agency of the Presidency of State Security known as the ‘Mabahith’ uses methods that lead to systematic violations including enforced disappearances, torture and arbitrary detention. The Mabahith controls detention centre such as Al Ha’ir or Ulaysha where detainees are reportedly kept outside the protection of the law. The use of enforced disappearance and arbitrary detention by the secret police are said to be linked to the systematic use of torture to extract confessions. These practices are said to be strengthened by an obvious lack of accountability, as allegations of torture or other forms of ill-treatment do not appear to be taken seriously and officials are never prosecuted for committing such acts. Following a visit to Saudi Arabia in 2017, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism concluded⁴ that Saudi Arabia’s failure to provide minimum procedural safeguards during detention and interrogation, as well as its judicial practice of admitting coerced confessions into evidence, strongly suggests that the practice of torture is officially endorsed.

38. Moreover, it is alleged that enforced disappearances are committed when the authorities refuse to acknowledge the continued detention and whereabouts of those subjected to incommunicado detention. The practice of holding individuals incommunicado in Saudi Arabia is reportedly characterised by ill-treatment and torture, used as a means of interrogation, and lack of access to legal representation. As a result, it is alleged that the practice of incommunicado detention in Saudi Arabia systematically amounts to enforced disappearance.

39. The online detainee database (Nafetha) operated by the Ministry of Interior provides information regarding the legal status of detainees and other information such as scheduled trial dates. However, it is reported that the database does not provide information about all detainees held at Mabahith prisons and does not include persons held at other prisons.

Shortfalls of the legal framework

40. It is reported that Saudi Arabia does not have specific legal provisions criminalising enforced disappearance and the existing legislation fails to offer sufficient protection against this crime, leaving persons vulnerable to the discretionary practices of the institutions holding criminal justice powers.

41. Furthermore, the sources report a number of procedural shortcomings. For instance the Committee against Torture (CAT) in its 2016 Concluding observations⁵ on Saudi Arabia noted with concern that the 2013 Code of Criminal Procedure provides the right to all detainees to have access to legal counsel and contact a person of their choice, yet the “laws do not specify a time frame within which officials must honour the right of persons deprived of their liberty to have access to a lawyer [...], moreover] lawyers must obtain the permission of investigators in order to access their clients”(para.14). Furthermore, laws do not guarantee the right to confidential communication between lawyers and their clients, nor do they provide a time frame within which officials must honour the right of detained persons to contact a person of their choice, but they give extended powers to investigators who have the discretion to bar accused persons from engaging in such communications for up to 60 days. Detainees can be held without charge for up to six months and there is no

⁴ See A/HRC/40/52/Add.2, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/363/55/PDF/G1836355.pdf?OpenElement>, accessed 6 May 2020.

⁵ See CAT/C/SAU/CO/2, 2016, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/SAU/CO/2&Lang=En, accessed 6 May 2020.

requirement to promptly present persons deprived of liberty to a judge who has the power to order their release. Officials have reportedly not implemented the requirements to promptly notify persons deprived of liberty of the reasons for their detention and to receive language assistance such as translation and interpretation.

42. The CAT also expressed concern at the provisions of the 2014 counter-terrorism legislation which, *inter alia*, allowed authorities to detain individuals for up to 90 days without access to family members or legal counsel. This law also allowed security forces to hold criminal suspects in custody for up to six months without judicial review. In November 2017, the law was replaced by a reportedly more repressive counter-terrorism legislation which criminalises a wide spectrum of acts, including acts which fall under the rights to freedom of opinion, expression, peaceful assembly and association, as well as freedom of thought, conscience and religion. Articles 19 and 20 of the 2017 law grant the Public Prosecution the authority to hold the accused in incommunicado detention for up to 90 days “if the investigation so warrants,” and grant the Specialised Criminal Court (“SSC”) the power to extend the period of custody indefinitely, including incommunicado detention. In practice, the use of incommunicado detention puts individuals at risk of disappearance.

The inadequacy of the institutional framework

43. It is reported that in recent years the restructuring of the security apparatus have centralised security powers under the authority of the King. On 20 July 2017, the Presidency of State Security was established by royal decree, with authority over all security institutions and a direct line of reporting to the King and the Crown Prince. The Presidency of State Security enjoys large discretionary powers including the authority to conduct “search, investigation, seizure, criminal and administrative prosecution” without judicial oversight, leaving individuals more vulnerable to enforced disappearance.

44. Public prosecution was also placed under the purview of the Royal Court, which is itself under the effective control of the King. Therefore, Judges are appointed and discharged by Royal Decree, based on a proposal of the Supreme Judiciary Council, whose presiding members are also appointed by the King. There is no separation between the judiciary and the executive power, thus hindering judicial independence. It is reported that the judiciary is required to coordinate its decisions with executive authorities, with the King and Crown Prince as arbiters. It is also alleged that the appointment of a new head of the Royal Court and the promotion of several public prosecutors, consolidate nepotism in the judicial system.

45. The absence of effective checks and balances has reportedly had an impact on the protection against human rights violation including enforced disappearances and related violations. The absence of legal or judicial constraints and accountability mechanisms does not allow for any avenue to address the practice of enforced disappearances in Saudi Arabia.

Absence of effective remedy for victims and families

46. There are allegations as to the lack of mechanisms providing effective remedies to relatives. Relatives who have made enquiries with the police as to the whereabouts of the disappeared individual are not provided with any official information and receive no additional direction or support in identifying additional avenues of recourse. Moreover, in the context described above there is no access to habeas corpus which constitute an obstacle to article 3 of the Declaration.

47. In addition, there is reportedly an important risk of reprisal in Saudi Arabia, cultivating a culture of fear. There are documented cases of individuals being detained, in violation of article 13 of the Declaration, after speaking out about the arrest of family members. This practice disincentives public efforts to hold the authorities to account. It is reported that even when information regarding a disappeared person is sought non-publicly, through enquiries at police stations or when cases are referred to the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, families have been threatened by the authorities. It was further stressed by the sources that Saudi Arabia was mentioned in 8 out of 10

annual reports of the UN Secretary-General on acts of intimidation and reprisal for cooperation with the United Nations in the field of human rights. The fear of reprisals is further heightened by the prospect that enquiries with authorities will put the disappeared person at greater risk of abuse⁶.

48. Lastly, it is reported that even in cases when a person has been forcibly disappeared and later freed, fear of reprisal means that such cases are never taken to court, undermining accountability at the domestic level. This is exemplified by the case of Khalid Al Omair whose case was addressed by the UN Human rights Special Procedures mechanism in a communication⁷ addressed to the Government of Saudi Arabia in July 2018 which provided a reply⁸ on 23 October 2018. Khalid Al Omair was allegedly forcibly disappeared and detained in July 2018 following his filing of an allegation of torture during his previous detention of eight years.

49. Sources assert that the practice of enforced disappearance in Saudi Arabia is widespread and systematic. The obstacles to the implementation of the 1992 Declaration are reportedly pervasive and deliberate, embedded in the legal, institutional and policy framework of Saudi Arabia. The utilisation of broad and repressive legislation, the systematic practices of security agencies and officers including arrest methods and interrogation techniques, and the lack of available remedies are all systemic obstacles to the implementation of the provision of the Declaration. Sources further allege that there is a risk that the practice of enforced disappearance could constitute a crime against humanity.

⁶ Saudi Arabia was listed in the following annual reports of the UNSG: 2019 report (A/HRC/42/30), 2018 report (A/HRC/39/41), 2017 report (A/HRC/36/31), 2015 report (A/HRC/30/29), 2014 report (A/HRC/27/38), 2013 report (A/HRC/24/29), 2012 report (A/HRC/21/18), 2011 report (A/HRC/18/19).

⁷ See <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23967>, accessed 6 May 2020.

⁸ See <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=34374>, accessed 6 May 2020.

Annex II

Standard procedure cases

Burundi

1. The Working Group transmitted 35 cases to the Government, concerning:
 - (a) Désiré Muheto, Burundian citizen born in 6 December 1982, reportedly abducted on 4 January 2016 in downtown Bujumbura, at the parking of public transport buses to the northern districts of the capital, by police officers;
 - (b) Maxime Banyakubusa, Burundian citizen born on 4 November 1959, allegedly abducted on 11 May 2015 near the Musaga area office by police and military officers;
 - (c) Landry Ndiwokubwayo, Burundian citizen born on 3 August 1998, allegedly abducted on 12 December 2015 from the home of a friend in district III, Jabe, Bwiza urban area, Mukaza commune, Bujumbura Mairie by police officers and soldiers;
 - (d) Charles Ndzeye, Burundian citizen born in 1992, reportedly abducted on 25 December 2015 in Quartier II, Ngagara urban area, Ntahangwa town, Bujumbura mairie, around 7 p.m., by soldiers commanded by a commander of the Muzinda Combat Engineering Camp, whose identity is known;
 - (e) Longin Mbazumutima, Burundian citizen born in 1983, allegedly abducted on 20 December 2015 on 3rd avenue, Musaga urban area, Muha commune, Bujumbura Mairie, by agents of the National Intelligence Service;
 - (f) Arthémon Misago, Burundian citizen born in 1977, allegedly abducted on 14 December 2015 at 6 a.m. in his home in Bujumbura by police officers from the Musaga urban area;
 - (g) Fiacre Ndayizeye, Burundian citizen born in 1990, allegedly abducted on 11 December 2015 at the Muha bridge on the road leading from Musaga by agents of the National Intelligence Service;
 - (h) Albert Dushime, Burundian citizen born on 16 February 1986, allegedly abducted on 22 November 2015 at the Kirundo centre, zone, commune and Province by a police commissioner and an agent of the National Intelligence Service whose identities are known;
 - (i) Emmanuel Irakoze, Burundian citizen born in 1989, allegedly abducted on 11 December 2015 at his home by an agent of the National Intelligence Service whose identity is known;
 - (j) Clovis Ntukamazina, Burundian citizen born on 28 October 1988, allegedly abducted on 21 October 2015 around 6 p.m. at Kinindo district, Bujumbura Mairie at the home of a friend by police officers of the Anti-Riot Brigade;
 - (k) Zacharie Nyandwi, Burundian citizen born on 12 June 1973, allegedly abducted on 13 December 2015 in the Mukoro district in the centre of Kayanza province by an official of the National Intelligence Service whose identity is known;
 - (l) Christophe Kavyino, Burundian citizen born in 1973, allegedly abducted on 6 November 2015 at his home located in the urban area of Cibitoke, by police officers from the urban area of Cibitoke, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie;
 - (m) Jean Claude Ngabowintore, Burundian citizen born in 1985, allegedly abducted in May 2015 on Colline Kirehe, Bugabira commune, Kirundo province by police officers from the Bugabira commune police station;

(n) Arsène Ndayikunda, Burundian citizen born in 1990, allegedly abducted on 11 November 2015 on the 5th avenue, Cibitoke urban area, Ntakangwa commune, Bujumbura Town Hall at his home by commander of the Muzinda Combat Engineer Camp, Bubanza province, whose identity is known;

(o) Santos Nibigira, Burundian citizen born on 3 August 1996, allegedly abducted on 11 December at home by police officers working in support of the protection of institutions;

(p) Eric Bigirimana, Burundian citizen born in 1987, reportedly abducted on 12 April 2016 in Bujumbura in the urban area of Kinama, Carama district by an agent of the National Intelligence Service whose identity is known;

(q) Salvator Bakundukize, Burundian citizen born in 1974, reportedly abducted on 15 August 2016 with his two sisters Ms. Marie Gakobwa, Ms. Jeanine Bakundukize and his brother Dieudonné Bakundukize on the road between Bugendana and Kibimba by agents of the National Intelligence Service;

(r) Thaddée Nduwimana, Burundian citizen born in 1985, allegedly abducted on 31 March 2018 at the peace village of Vyegwa in Ngozi by members of the Imbonerakure militia and the head of the national intelligence service in Ngozi, whose identity is known;

(s) Emmanuel Nahayo, Burundian citizen born in 1966, reportedly abducted on 19 May 2016 with three other soldiers in the urban area of Kamenge, Ntakangwa commune, Bujumbura Mairie by police officers and an agent of the National Intelligence Service whose identity is known;

(t) Jean Prime Kwizera, Burundian citizen born in 1990, reportedly abducted on 16 January 2016 on the Avenue de l'Université by an agent of the National Intelligence Service whose identity is known;

(u) Alex Manirakiza, Burundian citizen born in 1976, reportedly abducted on 21 January 2016 at his home in the district of Cibitoke, by soldiers under the orders of a commander of the Muzinda Combat Engineer Camp whose identity is known;

(v) Christian Vyamungu, Burundian citizen born in 1993, reportedly abducted on 8 January 2016 in the Ngozi district by police officers;

(w) Daniel Ndayiragije, Burundian citizen born in 1988, reportedly arrested on 5 October 2017 in the urban area of Cibitoke by a police officer of the rank of brigadier, whose identity is known;

(x) Déo Gahungu, Burundian citizen born in 2001, reportedly abducted on 22 December 2017 on the Mutobo Hill, by the commander of the 221st battalion of Ruyigi whose identity is known;

(y) Melchior Hakizimana, Burundian citizen born in 1982, reportedly abducted in April 2017 on his way to the Kinama market by a member of the Imbonerakure militia, whose identity is known;

(z) Jean Claude Nshimirimana, Burundian citizen born in 1986, reportedly abducted on 13 January 2016 at his home by a commander of the Combat Engineer Camp in Muzinda, Bubanza province, whose identity is known;

(aa) Aimé-Blaise Bigirimana, Burundian citizen born in 1981, was reportedly abducted on 18 February 2016 at the Boulevard du Peuple Murundi, Bujumbura Mairie, by an agent of the National Intelligence Service whose identity is known;

(bb) Dieudonné Bakundukize, Burundian citizen born in 1977, reportedly abducted on 15 August 2016 with his two sisters Ms. Marie Gakobwa, Ms. Jeanine Bakundukize and his brother Salvator Bakundukize on the road between Bugendana and Kibimba by agents of the National Intelligence Service;

(cc) Gaston Cishahayo, Burundian citizen born in 1978, reportedly abducted on 19 October 2017 at around 9 p.m. at the "Kumuhora" bar located in Bugarama by the provincial head of the National Intelligence Service in Muramvya, the provincial commissioner of police in Muramvya and a police officer whose identities are known;

(dd) Marie Gakobwa, Burundian citizen born in 1982, reportedly abducted on 15 August 2016 with her two brothers Salvator Bakundukize, Dieudonné Bakundukize and her sister Jeanine Bakundukize on the road between Bugendana and Kibimba by agents of the National Intelligence Service;

(ee) Suzanne Ncamugwanko, Burundian citizen born in 1982, reportedly abducted on 13 January 2017 on Gitwe hill, Mageyo zone, commune Mubimbi, province Bujumbura rural by a member of the militia Imbonerakure, whose identity is known, accompanied by two policemen;

(ff) Josianne Keranda, Burundian citizen born on 1 January 1981, reportedly abducted on 26 April 2018 at around 3 p.m., Bururi Avenue by agents of the national intelligence service;

(gg) Stany Ndayizamba, Burundian citizen born in 1989, allegedly abducted on 10 November 2018 in the area of Maramvya hill, by the provincial head of the National Intelligence Service of Bujumbura rural province whose identity is known;

(hh) Jean-Paul Nduwayo, Burundian citizen born in 1980, allegedly abducted on 17 September 2018 at Gaharawe hill, Gatumba the provincial head of the National Intelligence Service of Bujumbura rural province whose identity is known;

(ii) Jeanine Bukundukize, Burundian citizen born in 1993, reportedly abducted on 15 August 2016 with her two brothers Salvator Bakundukize, Dieudonné Bakundukize and her sister Marie Gakobwa on the road between Bugendana and Kibimba by agents of the National Intelligence Service.

Sri Lanka

2. The Working Group transmitted 31 cases to the Government, concerning

(a) Amurthampillai Tharmalinkam allegedly abducted on 19 February 1986 from Udumpankulam, Eastern Province by the Government Intelligence Service;

(b) Kandadamy Thampipillai allegedly arrested on 21 August 1990 in Murrokkodan Chenai Army Camp, Batticaloa, Eastern Province by members of the Sri Lankan Army;

(c) Devaranjan Devasakajam allegedly last seen on 16 April 2009 prior to his surrender to the Sri Lankan armed forces;

(d) Ganachelvan Uthayakumar allegedly arrested on 3 July 1990 in Inspector Eatham village, Pottuvil by the Sri Lankan army;

(e) Gnamuthu Puvanendran allegedly arrested on 8 September 1985 in Thankavelayuthapuram by the Sri Lankan army;

(f) Ilayathampi Thayanathan allegedly abducted on 18 May 1991 from Kanchikudicharu by Sri Lankan army;

(g) Sivanadiyer Vivekanantharajah allegedly abducted on 25 November 1991 near Thirukkivil Hospital by the Special Task Force;

(h) Kaaspiathi Kopalaretnam allegedly abducted on 8 April 1985 from Thirukkivil, Manka Maari Amman Estate by the army;

(i) Kanthaiya Aanathan allegedly abducted on 2 August 1990 from his residence in Kundumadu, Pottuvil-09 by the Sri Lankan army;

(j) Niroja Rajeswaran allegedly captured on January 2009 from Mannkandal, Puthukudiyiruppu, Mullaitivu District by the Sri Lankan army;

(k) Varatharajan Ramasamy allegedly last seen in 2010 at Vavuniya Government Hospital (Vavuniya, Vavuniya District, Northern Province);

(l) Tharsika Arulanantham allegedly last seen on 15 May 2009 in Kappaladi, Mullivaikal, Mullaitivu District, Northern Province;

- (m) Mayuran Sivanolipatham allegedly last seen in May 2009 at the Polonnaruwa Government Hospital (Polonnaruwa, Polonnaruwa District, North Central Province);
- (n) Mary Justina Mariyathas allegedly last seen in July 2009 at Madina Nagar in Poonthottam Rehabilitation Centre in Vavuniya (Vavuniya District, Northern Province);
- (o) Abirami Premnath allegedly last seen in May 2009 at an IDP camp in Chettikulam, Vavuniya District located in an area controlled at the time by the Sri Lanka Government;
- (p) Arumukam Lokachchanthiran allegedly abducted on 10 August 1990 from Umiri Thandiyadi, Thirukkivil by individuals believed to be members of the Sri Lankan army;
- (q) Vickinarasa Selvanayagam allegedly abducted by the Sri Lankan Army on an unknown date from Mullivaikal Mullaithivu district, Northern province;
- (r) Jenitamary Chandrasekaram allegedly last seen on 27 November 2008 in Puthukkudiyiruppu hospital in Mullaithivu district, Northern province;
- (s) Yogeswaran Vadivel allegedly last seen on 9 February 2009 driving a motorbike in an area controlled by the Sri Lankan army in Suthanthirapuram village, Mullaithivu district, Northern province, when he has hit by a shell attack;
- (t) Parapagazan Seevazatnom allegedly abducted on 5 November 1990 from Vinayagapuram village, Thirukkivil, Ampara district, Eastern province by members of Sri Lanka's Special Task Force;
- (u) Mohanathan Sakthivel allegedly abducted on 6 August 1996 from Kanchikudicharu Tank, Ampara district, Eastern province by members of the Special Task Force;
- (v) Jegatheswaran Nagarasa allegedly arrested on 17 May 2009 at the Omathai Army camp's check point, Vavuniya district, Northern province by the Sri Lankan army;
- (w) Suganthini Rasiah allegedly disappeared after entering an area controlled by the Sri Lankan army through Mullivaikal Mullaithivu district, Northern province;
- (x) Thawarasa Subramaniam allegedly abducted on 23 June 1995 from Thandiyadi, Ampara District, Eastern Province by members of the Sri Lanka's Special Task Force;
- (y) Surendran Thavasarasa allegedly abducted on 29 October 2007 from Thirukkivil, Ampara District, Eastern Province by members of the Sri Lanka's Special Task Force;
- (z) Jeganathan Thillainayakam allegedly arrested on 20 June 1991 in Tamarakulam, Ampara District, Eastern Province by members of the Sri Lanka's Special Task Force;
- (aa) Vijendran Thambiyappah allegedly arrested on 5 December 1990 in Tirukovil, Ampara District, Eastern Province by members of the Sri Lanka's Special Task Force;
- (bb) Kulendra Rasiah allegedly abducted on 23 December 2006 from Tirukovil by a paramilitary group believed to be linked to the military;
- (cc) Tharmalingam Kanapathipillai allegedly arrested on 11 March 2009 in Omathai, Vavuniya district, Northern province by members of the Omathai Army Group;
- (dd) Thiruchelvam Albert allegedly abducted on 5 November 1989 from Thirukkivil, Ampara, Eastern Province by the Sri Lanka's Special Task Force;
- (ee) Kesavaramanan Marimuthu allegedly last seen on 17 May 2009 at Vadduval Veddai.

Syrian Arab Republic

3. The Working Group transmitted 36 cases to the Government, concerning
 - (a) Mohammad Al Ahmad Al Kamesh, allegedly arrested on 24 January 2014 by agents of the Military Security located at a checkpoint near the Hama fire station;
 - (b) Hatem Al Mohammad, allegedly arrested on 20 March 2013 by Air Force Intelligence agents in military uniforms at a checkpoint located at the crossroad between the street that leads to Abil village in Homs and the ring road;
 - (c) Ismael Ismael, allegedly arrested on 1 February 2013 by members of the Military Security Branch near “blue beach” in Latakia;
 - (d) Basem Hakem, allegedly arrested on 7 May 2012 by Military Security Branch officers during a raid on his house in Sifsafiyeh;
 - (e) Raed Hakem, allegedly arrested on 7 May 2012 by Military Security Branch officers at a checkpoint in Muradah;
 - (f) Yahia Al Khalil, allegedly arrested on 5 January 2013 by the Syrian Armed Forces at a checkpoint in Al Ghouta district in Homs;
 - (g) Abdullah Badr, allegedly arrested on 27 May 2014 by a patrol of the Military Security Branch during a raid on his house;
 - (h) Ghasan Khalifa, allegedly arrested on 23 June 2012 by members of the State Security at a checkpoint near Al-Naim;
 - (i) A minor at the time of alleged disappearance, allegedly arrested along with his father Ghasan Khalifa on 23 June 2012 by members of the State Security at a checkpoint near Al-Naim;
 - (j) Anwar Korabi, allegedly arrested on 3 March 2014 by military intelligence services at the main checkpoint in Banias;
 - (k) Mohamed Maher Yasin, allegedly arrested on 25 September 2012 by State security forces in a library near the Victoria Bridge in Saqba;
 - (l) Okbah Nor Aldien, allegedly abducted on 1 November 2011 by the Air force security in Saqba;
 - (m) Ahmad Haj-Bakri, allegedly arrested on 3 June 2012 at a checkpoint located at the crossroad of the road leading to Latakia’s Industrial City;
 - (n) Mohamad Tabanja, allegedly arrested on 3 June 2012 at a checkpoint located at the crossroad of the road leading to Latakia’s Industrial City;
 - (o) Mohammad Shakra, allegedly arrested on 1 July 2012 by the Military Intelligence Directorate at a checkpoint located at the entrance of Demsarkho village, north of Latakia, near the Presidential Palace;
 - (p) Ahmad Zanbelkji, allegedly arrested on 19 March 2013 by the Syrian Army at a checkpoint located at the entrance of the city of Yabrud;
 - (q) Ali al Mesleh, allegedly arrested on 11 January 2013 inside the Khan al Sheeh refugee camp, by armed groups affiliated to the Air Security forces;
 - (r) Bashar al Mesleh, allegedly arrested on 11 January 2013 inside the Khan al Sheeh refugee camp, by armed groups affiliated to the Air Security forces;
 - (s) Abdo Al Saghier, allegedly arrested on 21 July 2012 at a checkpoint in Adra by Air Force Intelligence officers;
 - (t) Raslan Al Khatib, allegedly abducted on 26 February 2012 in Damascus by members of the Air Force Intelligence as he was travelling to receive medical treatment;
 - (u) Juma Hasno, allegedly arrested on 3 July 2013 at the Syria- Lebanon border by members of the Political Security Directorate as he was travelling to Lebanon for work;

- (v) Anas Hasno, allegedly arrested on 12 July 2012 at his house in Al Tremseh by the Syrian Air Force;
- (w) Khaled Alkhaled, allegedly arrested on 12 July 2012 in a raid on his house in al Tremseh, Mahardah district, Hamah governate by members of the Syrian Air Force;
- (x) Mohamad Al Sattam, allegedly arrested on 12 July 2012 by members of the Air Force Intelligence in the northern neighbourhood of Taramsah village;
- (y) Museaf Al Humaidi, allegedly arrested on 6 November 2011 in Kafr Zita, by the Syrian army while he was travelling to work;
- (z) Jalal Alsotel, allegedly arrested on 4 July 2013 by the Shabiha armed group reportedly associated with the Syrian Army in Salamyah, Syria;
- (aa) Abdulhamid Kabbani, allegedly arrested on 20 March 2012 by military security services at a crossing point located in the Bustan al-Qasr neighbourhood of Aleppo;
- (bb) Mohammad Hamdao, allegedly arrested on 1 April 2013 by the Military Security in Damascus on grounds of his alleged involvement in the Free Syrian Army;
- (cc) Mohammed Almassry, allegedly arrested on 30 June 2012 in Jdhidet Artwz by the Syrian Armed Forces;
- (dd) Ali Al Khazali, Iraqi national, allegedly arrested on 15 October 2006 in the Syrian town of Set Zaynab, 10 km south of Damascus by members of the Criminal Security Branch of Bab Musla;
- (ee) Hazim Al Zameli, Iraqi national, allegedly arrested on 15 October 2006 in the Syrian town of Set Zaynab, 10 km south of Damascus by members of the Criminal Security Branch of Bab Musla;
- (ff) Ali Da'doush, allegedly arrested on 18 June 2014 by agents of Political Security Branch in military uniforms near the bus station in al Karaj area of Homs city, from where he was supposed to travel home to Houwarin village;
- (gg) Suleiman Al Zaid, allegedly arrested on 5 March 2013 with his three daughters, by the Syrian Armed Forces at the Al Van checkpoint near al Bardeh village in the suburbs of Damascus;
- (hh) Marwa Al Zaid, allegedly arrested on 5 March 2013 with her father Suleiman and two sisters by the Syrian Armed Forces at the Al Van checkpoint near al Bardeh village in the suburbs of Damascus;
- (ii) A minor at the time of alleged disappearance, allegedly arrested on 5 March 2013 with her father Suleiman and two sisters by the Syrian Armed Forces at the Al Van checkpoint near al Bardeh village in the suburbs of Damascus;
- (jj) A minor at the time of alleged disappearance, allegedly arrested on 5 March 2013 with her father Suleiman and two sisters by the Syrian Armed Forces at the Al Van checkpoint near al Bardeh village in the suburbs of Damascus.

Annex III

Reply to general allegation

Brazil

1. Regarding the letter sent by the Chair-rapporteur of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGIED) of the Human Rights Council (HRC), on general allegations received in relation to the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in Brazil, the following information has been received from the Ministry of Women, Family and Human Rights (MMFDH).

2. Initially, it is worth noting that the facts narrated in the allegations contain numerous inaccuracies. One of them concerns the mandate of the Special Commission on Political Death and Disappearances (CEMDP). According Law 9,140, of December 4, 1995, which created it, its mandate is as follows:

[QUOTE]

- I - Proceed with the recognition of dead and disappeared persons, under the terms of Law 9,140;
- II - Make efforts to locate the bodies of disappeared persons in the event of evidence as to where they may be deposited;
- III - Issue an opinion on the requirements in relation to the indemnity that may be formulated.

[UNQUOTE]

3. In fact, CEMDP has consolidated itself over the years, as an important body in the realization of the right to memory and truth and in the search and identification of politically disappeared persons. Its performance did not suffer any interruption in recent months. However, the alleged power mentioned in the letter of allegations to “rectify death records” is not consistent with the Brazilian legal system. The deaths are recorded by the offices of civil registry of natural persons, as stated in Law no. 9,140. Decisions of the Commission on recognition of disappeared persons can only substantiate requests for death certificates, under the terms of the same legal diploma.

4. As for the members of the CEMDP, it should be noted that, as established in article 5 of the aforementioned law, CEMDP members are of free choice and appointment by the President of the Republic, who also has the prerogative to indicate, among them, who will preside over it, with a casting vote. There is, therefore, no arbitrariness in changing the composition of the CEMDP. It should be also underlined that there was no change to the characteristic of the Commission of bringing together the different powers of the Republic and civil society, its composition has been maintained in accordance with law:

[QUOTE]

Art. 5. § 1 - Of the seven members of the Commission, four will be chosen:

- I - among the members of the Human Rights Commission the Chamber of Deputies;
- II - among persons with ties to family members the persons mentioned in the list in Annex I;
- III - among the members of the Federal Public Prosecution Service; and
- IV - among the members of the Ministry of Defense.

[UNQUOTE]

5. Changes in the composition of the CEMDP did not cause setbacks in the search and identification of politically disappeared persons. All undertakings of the Commission are being fulfilled; especially those related to bone remains exhumed from the clandestine ditch of Dom Bosco Cemetery, located in Perus, São Paulo. The activities undertaken by the formerly known as Working Group of Perus are still governed by the same instruments and performed by the same persons. With regards to financial support, there is an expected increase of resources, on the basis of a revision of the Letter of Agreement signed with the International Commission on Missing Persons (ICMP).

6. There is, furthermore, an inaccuracy with regard to the legal basis for the analysis of Perus. The Federal Union has never been judicially ordered to proceed with analyses. There is no “judicial decision” condemning the Union to do so, but a voluntary agreement entered into by the Union and the other participants, in an environment of conciliation, approved by the competent court, in full implementation process.

7. CEMDP, as well as MMFDH, has been working to keep the search and identification activities ongoing, always respecting the spaces of dialogue with family members of politically disappeared. It is also noted that one of the first actions of the current CEMDP president was to attend a meeting with relatives of politically disappeared persons at the Center of Forensic Archeology and Anthropology of the Federal University of São Paulo (CAAF/UNIFESP), where the bone remains of Perus are analyzed.

8. Regarding the impact of Decree 9,759/2019 on working groups that have among their functions the search for disappeared persons, it is emphasized that the norm regulates the competence of CEMDP in its attribution to “make efforts to locate the bodies of disappeared persons” is Law 9,140/95. Such assignment, therefore, cannot be changed by decree, so that the aforementioned legal diploma did not change the substance of the work being undertaken by the Commission.

9. Regarding the questioning about the strategy developed “in order to identify the remains found in the tomb of Perus that were not sent for identification to the ICMP”, imprecision is registered regarding the number of politically disappeared persons sought in the clandestine ditch of Perus. The sets of bones exhumed there are not all alleged victims of the military regime. The deaths of people buried in the site occurred for different causes and in varied contexts. It was found, for example, early on during the analyses, that, possibly, a significant number of bones corresponded to bodies of children who died due to an outbreak of meningitis occurred in the 1970s, in São Paulo. These bones were reinterred at the time of their discovery. Only the bones that could belong, due to their anatomical characteristics, to the politically disappeared persons being searched were separated for analysis.

10. After a thorough analysis of the set of the Brazilian politically disappeared, 41 persons were identified with some possibility, even if remote, to be found in Perus. It should be noted that this is only a possibility, because the probability of finding one or another individual varies enormously, depending on the personal trajectory of each one, at the time of disappearance. Efforts to identify politically disappeared persons among the bone remains exhumed from Perus follow internationally recognized scientific protocols and have not suffered change.

11. Regarding the sending of samples for analysis of the ICMP, the timetable remains unchanged, as the relationship between that institution and the Union. It should also be noted that the president of the CEMDP and the scientific coordinator of the Commission were, in December 2019, at the entity’s headquarters in the Hague, with the purpose of negotiating details of the term that will expand the Letter of Agreement with the institution.

12. It is noteworthy, moreover, that about 750 genetic samples have already been sent to the ICMP. Only the boxes with mixtures of bone remains, which will comply with a specific technical protocol created with the support of the ICMP itself, have not yet been sent, due to the normal work schedule planned since the beginning of the partnership. No substantial change has occurred in this regard. Thus, all bone remains with the possibility of

belonging to politically disappeared persons have been or will soon be forwarded to the ICMP.

13. As regards, finally, to the provision to the Working Group of information that the State has in their records on the disappearance and death of Fernando Santa Cruz, it is indicated that such information is included in the final report of the National Truth Commission (CNV), of December 10, 2014, and can be accessed through the “Memórias Reveladas” (Revealed Memories) website, from the National Archives (<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/>). It should be noted details of the individual process before the CEMDP can only be made available upon due family consent, as they may contain intimate data.
